

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

42ª REUNION — 3ª SESION ORDINARIA DE PRORROGA —
DICIEMBRE 21 Y 22 DE 1994

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri,
Carlos Alberto Romero y Horacio Daniel Usandizaga

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

DIPUTADOS PRESENTES:

ABASTO, Angel Leónidas
ABIHAGGLE, Carlos Enrique
ACENOLAZA, Florencio Gilberto
ACHEM, Antonio
ADAIME, Felipe Teófilo
ALHAMONTE, Alberto G.
ALBERTI, Juan Carlos
ALCALA, Néstor Ricardo
ALGABA, Ernesto Pedro Andrés
ALVAREZ, Carlos Alberto
ALVAREZ, Carlos Raúl
ALVAREZ ECHAGUE, Raúl Angel
ALVAREZ GARCÍA, Normando M.
ANTELO, José María
ARAGONÉS de JUAREZ, Mercedes
ARANDA, Saturnino Dantti
ARGUELLO, Jorge Martín Arturo
ARIAS, César
ARMENDARIZ, Alejandro
ARRECHEA, José Salvador
AYALA, Susana Beatriz
AYETZ, Lilliana
BALESTRA, René Helvecio
BALESTRINI, Alberto Edgardo
BALESTRINI, Miguel Alberto
BALTER, Carlos Mario
BARBERA, Eliseo
BARBOTTI, Atilio Ector
BARRIONUEVO, Eduardo E.
BAUM, Daniel
BECERRA, Carlos Armando
BECERRA, Nicolás Eduardo
BENEDETTI, Jorge Enrique
BENZI, María Cristina
BERHONGARAY, Antonio Tomás
BERMÚDEZ, María del Pilar
BIANCHI SILVESTRE, Marcela
BONINO, Miguel Angel
BONOMI, Silvia Mónica
BORDA, Osvaldo
BRACCHI, Osvaldo Américo
BRANDA, Carlos Ernesto
BRESER, Adalberto Edgardo
BRUNELLI, Naldo Raúl A.
BRUZZO, Omar Obdulio
BULLRICH, Patricia
BUSSI, Antonio Domingo
CABRON, Juan Carlos

CALLABA, Aníbal
CAMAÑO, Eduardo Oscar
CAMARA, Mario Angel
CASARI de ALARCIA, Leonor
CASTILLO, José Luis
CASTILLO, Oscar Anibal
CASTRO, Carlos José
CEBALLOS, Walter Alberto
CERDERA, Rogelio Rafael
CLOSS, Ramón Alberto
CORCHUELO BLASCO, José M.
CROSTELLI, Juan Carlos
D'ALESSANDRO, Miguel
D'AMBROSIO, Angel Mario
DAUD, Jorge Carlos
D'ELIA, Roberto Antonio
DELLEPIANE, Carlos Francisco
DÍAZ MARTÍNEZ, Jorge Raúl
DIGÓN, Roberto Secundino
DI TULLIO, Héctor Horacio
DONNI, Luisa Cristina
DRISALDI, María Rita
DUMÓN, José Gabriel
DURANONA y VEDIA, Francisco de
DURRIEU, Marcela Margarita
ESCOBAR, Jorge Alberto
ESTEVEZ BOERO, Guillermo E.
FABRISIN, Carlos Alberto
FELGUERAS, Ricardo Ernesto
FERNANDEZ GILL, Guillermo
FERNANDEZ MEIJIDE, Graciela
FLORES, Rafael Horacio
FRAGOSO, Francisco Ulises
FUNES, Carlos Delcio
GALANTE, Pedro Jorge
GALVAN, Raúl Alfredo
GARCÍA MORENO, Miguel Angel
GAUNA, Juan Octavio
GAZIA, Rodolfo Mauricio
GIMÉNEZ, Delfor Abel
GIMÉNEZ, Ramón Francisco
GIOJA, José Luis
GOLPE, Carlos Horacio
GOLPE, Néstor Lino
GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos E.
GONZALEZ CABAÑAS, Tomás W.
GONZALEZ GAVIOLA, Juan H.
GRANADOS, Dulce
GREEN, Gustavo Adolfo
GUERRERO, Luis Serafin
HARDY, Aníbal Osvaldo

HERNANDEZ, Antonio María
HERRERA, Bernardo Eligio
HERRERA ARIAS, Manuel H.
HUMADA, Raúl
IBARBIA, José María
IBARRECHE, Julio César
ITURRE, César Eusebio
JAUNARENA, José Horacio
JUNCOSA, Rodolfo Aldo
KAMMERATH, Germán Luis
KELLY, Elsa Diana Rosa
KESSLER, Ana Raquel
KOTH, Carlos
LAFALLA, Arturo Pedro
LAHOZ, José Fernando
LAMBERTO, Oscar Santiago
LARRABURU, Dámaso
LECONTE, Ricardo Guillermo
LEGUIZAMÓN, María Laura
LÓPEZ, Alcides Humberto
LÓPEZ, José Augusto
LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
LOSADA, Luis Enrique
LYNCH, Carlos Alberto
LLOPIS, Enrique Raúl
MACEDO, Horacio Antonio
MACHADO, Oscar Alfredo
MAIDANA, Elsa Ignacia
MANFREDOTTI, Carlos
MAQUEDA, Juan Carlos
MARCOLLI, Juan Miguel A.
MARCOS, Ricardo Ernesto
MARTÍNEZ, Esteban
MARTÍNEZ, Silvia Virginia
MARTÍNEZ GARBINO, Emilio R.
MATHOV, Enrique José
MATZKIN, Jorge Rubén
MENDOZA, Claudio Ramiro
MENDOZA, Martín
MENECHINI, Javier Raynaldo
MERCADER, Martha Evelina
MENEM, Carlos Omar
MERCADO LUNA, Ricardo Gastón
MICHELLI, Marco Aurelio
MICHITTE, Salomón Antonio
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MIRALLES de ROMERO, Norma
MOLARDO, Elvio Francisco
MONTIEL, Sergio Alberto
MOREAU, Leopoldo Raúl
MORELLO, Emilio Pedro

MULLER, Mabel Hilda
 MUNIAGURRIA, Marcelo Julio
 MUÑOZ, Marcelo Bernardo
 NACUL, Miguel Camel
 NATALE, Alberto Adolfo
 NEDER, Jorge Humberto
 NEGRI, Mario Raúl
 NIEVA, Alejandro Mario
 NINO, Jorge
 NOVAU, Pedro José
 OLIVERA, Enrique José
 ORGAZ, Carlos Alfredo
 ORQUIN, Leopoldo Manuel
 ORTIZ MALDONADO, Gastón H.
 PARADA, Alberto
 PAROLA, José María
 PASCUAL, Rafael Manuel
 PATTERSON, Ricardo Ancell
 PELAEZ, Víctor
 PELLIN, Osvaldo Francisco
 PEPE, Lorenzo Antonio
 PERALTA, Anibal Pedro
 PEREZ, Jorge Telmo
 PERNASETTI, Horacio F.
 PERRINI, Gioconda Eulalia
 PESCE, Félix
 PICCININI, Ana Ida
 PICHETTO, Miguel Angel
 PIERRI, Alberto Reinaldo
 POLINO, Héctor Teodoro
 PRAT, Alfredo Ernesto
 RE, Ricardo Horacio
 RODRIGO, Esteban Joaquín
 RODRIGUEZ, Jesús
 RODRIGUEZ, Mabel E.
 RODRIGUEZ SANUDO, Hugo B.
 ROIG, Angel
 ROJO, Rubén Darío

ROMERO, Carlos Alberto
 ROMERO, Humberto Antonio
 RUBINI, Mirta Elsa
 RUIZ PALACIOS, José David
 SAADI, Ramón Eduardo
 SALINO, María Antonia
 SAMPIETRO, Darcí
 SANTIN, Eduardo
 SARQUIZ, José Alberto
 SCELZI, Carlos José
 SEBASTIANI, Claudio A.
 SMITH, Santos
 SOBRINO, Margarita María
 SOLANAS, Fernando E.
 SORIA, Carlos Ernesto
 SPINOSA, Augusto Juan
 SUCARIA, Nefel
 SUEIRO, Carlos Adolfo
 TENEV, Carlos
 TEODOSIU, Jorge Nicolás
 TERRAGNO, Rodolfo Héctor
 TOGNI de VELY, Adriana
 TOMA, Miguel Angel
 TOPA, Raúl Roque
 TOTO, Francisco Patricio
 TRETTEL MEYER, Raúl
 TROYANO, Silvia Elena
 USANDIZAGA, Horacio Daniel
 VALCARCEL, Juan Manuel
 VARELA, Néstor Angel
 VARELA CID, Eduardo
 VAZQUEZ, Roberto
 VAZQUEZ, Silvia Beatriz
 VENESIA, Gualberto Edgardo
 VICCHI, Raúl Horacio
 VIGLIONE, Attilio Oscar
 ZAVALIA, José Luis
 ZICARELLI, Orlando A.
 ZUCCARDI, María Cristina

AUSENTES, CON LICENCIA:

FAYAD, Víctor Manuel
 KAEHLER, Ernesto Rolando
 SANCHEZ GALDEANO, Roque
 SCHIABETTI, Juan

AUSENTES, CON LICENCIA
PENDIENTE DE APROBACION DE
LA HONORABLE CAMARA:

ALSOGARAY, Alvaro Carlos
 BRAVO, Alfredo Pedro
 FIGUEROA, Pedro Octavio
 MOLINAS, Ricardo Francisco
 PINTO, Guillermo
 RICO, Aldo
 ROGGERO, Humberto Jesús
 STORANI, Federico

AUSENTES, CON AVISO:

ALENDE, Oscar Eduardo
 BISCHOF, Enrique Alberto
 CAMPERO, Rodolfo Martín
 CARCA, Elisa Beatriz
 DEL FABRO, Lillán
 FALLETTI, Julio César José
 FOLLONI, Jorge Oscar
 GALLO, Orlando Juan
 GARAY, Nicolás Alfredo
 GONZALEZ, Antonio Erman
 GUZMAN, María Cristina
 MARTINEZ, Manuel Luis
 MURIEL, Néstor Jorge
 PARAJÓN, José María
 POLO, Luis Nicolás
 RODRIGUEZ, José
 ROY, Irma
 VITAR, José Alberto

— La referencia acerca del distrito, bloque y período del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspondiente a la sesión preparatoria de fecha 11 de mayo de 1994.

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 4892.)
2. Plan de labor de la Honorable Cámara. (Pág. 4892.)
3. Asuntos cuya votación conjunta dispuso la Honorable Cámara:

I. Dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Agricultura y Ganadería, de Ciencia y Tecnología y de Finanzas en el proyecto de declaración de los señores diputados Abihaggle y Lafalla por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga la adopción de medidas destinadas a resolver la crisis socioeconómica que enfrenta la localidad de Monte Comán, provincia de Mendoza, en razón de la reducción de la actividad ferroviaria (2.851-D.-94). (Página 4898.)

II. Dictamen de la Comisión de Juicio Político en los pedidos de formación de causa a las señoras juezas doctoras Milagros Ferro Puch, Angeles Beatriz de Ibarreta, Cristina Ercilia Ibáñez de

Quintana y Beatriz Celia Marino, titulares de los juzgados nacionales del trabajo números 6, 15, 16 y 17 (2.779-D.-92; 1.474 y 1.506-O.V.-92; 12, 123, 153 y 297-O.V.-93; 528-P.-92 y 18-P.-93). (Pág. 4899.)

III. Dictamen de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Tercera Edad en el proyecto de declaración del señor diputado Galante y otros por el que se solicita al Poder Ejecutivo la incorporación, como servicio del PAMI, de un plan de trabajo de gimnasia para la tercera edad (1.287-D.-91). (Pág. 4903.)

IV. Dictamen de la Comisión de Deportes en el proyecto de declaración del señor diputado D'Elia por el que se expresa beneplácito por el triunfo de la tenista Gabriela Sabatini en el Torneo de Maestras realizado en la ciudad de Nueva York (5.065-D.-94). (Pág. 4910.)

V. Dictamen de la Comisión de Deportes en el proyecto de resolución de los señores diputados Álvarez (C. R.) y Parada por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre el desarrollo de

competencias deportivas fuera de la fiscalización normada en la ley 24.052, sobre creación de la Comisión Nacional de Automovilismo Deportivo en el ámbito de la Secretaría de Deportes (5.079-D.-94). (Pág. 4910.)

- VI. Dictamen de la Comisión de Juicio Político en el pedido de formación de causa a la señora jueza nacional en lo Correccional doctora Marta Nocetti de Ange'eri, y a los señores jueces de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Críminal, doctores Luis Escobar, Alberto Campos y Eduardo Valdovinos (225-P-93). (Pág. 4911.)
- VII. Dictamen de las comisiones de Comercio y de Industria en el proyecto de resolución del señor diputado Pesce y otros por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre la importación de automotores desde la República del Brasil (4.657-D.-91). (Pág. 4912.)
- VIII. Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el proyecto de declaración del señor diputado Breser por el que se solicita al Poder Ejecutivo que declare de interés nacional el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) (4.882-D.-94). (Pág. 4913.)
- IX. Dictamen de las comisiones de Industria y de Comercio en el proyecto de resolución del señor diputado Usandizaga por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas a las MIPYME (4.716-D.-94). (Pág. 4914.)
- X. Dictamen de las comisiones de Industria y de Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora diputada Mercader por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre la situación por la que atraviesa el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) (4.753-D.-94). (Pág. 4916.)
- XI. Dictamen de las comisiones de Industria y de Comercio en el proyecto de ley del señor diputado Polino y otros por el que se establece la obligatoriedad para las dependencias nacionales de utilizar papel reciclado para sus tareas habituales (2.541-D.-94). Se sanciona como declaración. (Pág. 4917.)
- XII. Dictamen de la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad en el proyecto de declaración de la señora diputada Rubini por el que se declara de interés legislativo la II Jornada Nacional Pro a la Vida en Defensa de la Familia Argentina, a llevarse a cabo en Vicente López, provincia de Buenos Aires (5.275-D.-94). (Pág. 4919.)
- XIII. Proyecto de ley del señor diputado Barberá y otros sobre creación del Instituto de Investigación de Enfermedades Tropicales en el ámbito de la Secretaría de Salud del Ministerio de Acción Social y Salud Pública, San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta (2.058-D.-94). (Pág. 4920.)
- XIV. Proyecto de declaración del señor diputado Giménez (D. A.) por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga adoptar las medidas necesarias a fin de que se limite la importación de mercaderías en los rubros textil, calzado, cuero y confecciones (4.771-D.-91). (Pág. 4922.)
- XV. Proyecto de ley del señor diputado Giménez (D. A.) por el que se dispone la erección de un monumento en la ciudad de Formosa, dedicado a los hombres que prestaron servicios en las unidades militares en el Nordeste Argentino (4.016-D.-94). (Pág. 4927.)
- XVI. Proyecto de declaración de los señores diputados Pepe y Toma por el que se solicita al Poder Ejecutivo que se designe con el nombre de "Teniente General Juan Domingo Perón", a un regimiento de infantería o a algún otro organismo relevante del Ejército (4.685-D.-94). (Pág. 4929.)
- XVII. Proyecto de ley del señor diputado Romero (C. A.) por el que se declara zona de emergencia hídrica a la localidad de Chañar, provincia de La Rioja (2.291-D.-93). (Pág. 4930.)
- XVIII. Proyecto de ley del señor diputado Alvarez (C. R.) sobre régimen de estímulo a la participación de los deportistas argentinos en los Juegos Panamericanos (4.593-D.-94). (Pág. 4930.)
- XIX. Proyecto de ley de los señores diputados Romero (C. A.) y Neder por el que se impone el nombre de "Ingeniero Aeronáutico Ambrosio L. V. Taravella" al Aeropuerto Internacional de Córdoba (3.071-D.-94). (Pág. 4931.)
- XX. Proyecto de declaración del señor diputado Vicchi y otros por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga una línea de créditos a tasas diferenciales a productores agropecuarios para la adquisición de instrumentos de protección contra el granizo (5.418-D.-94). (Pág. 4932.)

- XXI. Proyecto de resolución del señor diputado Mathov por el que se declara de interés parlamentario el evento educativo Pedagogía 95 - Encuentro por la Unidad de los Educadores Latinoamericanos, a realizarse en La Habana, República de Cuba (5.448-D.-94). (Pág. 4933.)
- XXII. Proyecto de resolución del señor diputado Mathov por el que se declara de interés parlamentario a la Primera Muestra de Cine Argentino y Habla Latina "Estreno 95" a llevarse a cabo en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires (5.162-D.-94). (Pág. 4933.)
- XXIII. Dictamen de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor diputado Roig sobre otorgamiento a doña Eva Petrona Franco de una pensión graciable vitalicia (2.059-D.-94). (Pág. 4934.)
- XXIV. Dictamen de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre otorgamiento de una pensión graciable vitalicia al doctor Enrique Wedovay (126-S.-93). Se sanciona definitivamente. (*Ley 21.440.*) (Pág. 4935.)
- XXV. Dictamen de la Comisión de Tercera Edad en el proyecto de declaración del señor diputado Vicchi por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga otorgar un subsidio al centro de jubilados de la ciudad capital de la provincia de Mendoza (4.001-D.-94). (Pág. 4935.)
- XXVI. Proyecto de declaración del señor diputado Vicchi por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga la donación de una máquina dragadora al Consejo de Emergencia de Monte Comán, provincia de Mendoza (4.880-D.-94). (Página 4936.)
- XXVII. Dictamen de las comisiones de Legislación General, de Familia, Mujer y Minoridad y de Justicia en el proyecto de ley de la señora diputada Sobrino y otros sobre la creación del Registro Nacional de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción (296-D.-94). (Pág. 4936.)
- XXVIII. Proyecto de declaración del señor diputado Vicchi por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga otorgar créditos a tasas diferenciales destinados a fomentar microemprendimientos piscícolas de salmónidos con fines comerciales (270-D.-94). (Pág. 4939.)
- XXIX. Proyecto de declaración del señor diputado Vicchi por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga otorgar créditos para el fomento de empresas cunícolas (277-D.-94). (Pág. 4940.)
- XXX. Proyecto de resolución del señor diputado Pernasetti y otros por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo acerca de la existencia de estudios sobre fuerzas radiactivas en la zona oeste de la provincia de Catamarca (2.875-D.-94). (Pág. 4940.)
- XXXI. Proyecto de resolución de los señores diputados Becerra (C. A.) y Aceñolaza por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre la existencia de petróleo en las islas Malvinas, la política pesquera en el área, el levantamiento de las "minas antipersonal" y la política a desarrollar en relación con los *kelpers* (5.133-D.-94). (Pág. 4942.)
- XXXII. Proyecto de declaración de la señora diputada Kelly por el que solicita al Poder Ejecutivo que disponga reactivar el funcionamiento del Instituto para la Integración de América Latina (INTAL) como parte integrante permanente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2.948-D.-94). (Pág. 4949.)
- XXXIII. Proyecto de declaración del señor diputado Viglione por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga declarar de interés nacional el Programa de Incremento de Plantaciones Forestales implementado por la provincia del Chubut (3.669-D.-94). (Pág. 4951.)
- XXXIV. Proyecto de resolución del señor diputado Trettel Meyer por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre el Acuerdo de Cooperación Nuclear firmado entre nuestro país y Canadá (1.883-D.-94). (Pág. 4951.)
- XXXV. Proyecto de ley del señor diputado Usandizaga y otros, sobre modificación del artículo 9º del decreto 937/93, referido a régimen de subsidio bajo la forma de reintegro fiscal aplicable a los sujetos titulares de empresas que realicen ventas de bienes de capital con destino a inversiones en actividades económicas en el país (5.303-D.-94). (Pág. 4953.)
- XXXVI. Proyecto de ley del señor diputado Corchuelo Blasco y otros sobre régimen de identificación y circulación de automotores para discapacitados (834-D.-94). (Pág. 4954.)

XXXVII. Proyecto de declaración del señor diputado *Corchuelo Blasco* por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga prever la posibilidad de instalar un sistema de señalización que permita a los usuarios del servicio telefónico el control de los pulsos que componen la liquidación de sus tarifas (1.668-D.-94). (Pág. 4954.)

XXXVIII. Dictamen de la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad en el proyecto de resolución de la señora diputada *Carca* por el que se declara de interés parlamentario el Seminario Internacional "El derecho y los chicos: balance y perspectiva de las reformas legislativas" que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires (5.437-D.-94). (Pág. 4955.)

XXXIX. Proyecto de resolución del señor diputado *Leconte* por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga la reparación de las instalaciones de CO.TE.CAR. en Paso de los Libres, provincia de Corrientes (5.555-D.-94). (Pág. 4956.)

XL. Dictamen de las comisiones de Legislación General, de Cultura, de Industria y de Asuntos Municipales en el proyecto de ley del señor diputado *Ibarreche* sobre régimen de depósito de obras impresas en número suficiente para ser destinadas a bibliotecas nacionales, provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires como requisito para la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual (1.124-D.-94). (Página 4956.)

XLI. Proyecto de ley de los señores diputados *Polino, Bravo, Solanas, Fabrisin, Mendoza (M.), Flores y González Caviola* sobre ampliación del presupuesto de las instituciones de la seguridad social para el ejercicio 1995 (5.436-D.-94). (Página 4958.)

XLII. Proyecto de ley en revisión por el que se acuerda autorización al señor presidente de la Nación para ausentarse del país durante el año 1995 (119-S.-94). Se sanciona definitivamente (*ley 24.439*). (Pág. 4959.)

XLIII. Proyecto de ley de señor diputado *Teodosiu* y otros sobre creación de la Universidad Nacional de Lanús, provincia de Buenos Aires (1.665-D.-94). (Pág. 4959.)

XLIV. Dictamen de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se crea la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (141-S.-93). (Pág. 4960.)

XLV. Dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación en el proyecto de ley del señor diputado *D'Alessandro* y otros sobre creación de la Universidad Nacional de Villa María, provincia de Córdoba (3.640-D.-93). (Pág. 4962.)

XLVI. Dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación en el proyecto de ley del señor diputado *Pepe* y otros sobre creación de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires (3.197-D.-93). (Pág. 4965.)

XLVII. Dictamen de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Asuntos Municipales y de Familia, Mujer y Minoridad en el proyecto de declaración de la señora diputada *Rubini* por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga declarar de interés nacional el Programa Cuidado del Hospital Infantil "Carolina Tohar García", en el ámbito del Jardín Zoológico de la ciudad de Buenos Aires (4.837-D.-94). (Página 4966.)

XLVIII. Pronunciamiento de la Honorable Cámara sobre los asuntos a los que se refieren los números 3.1 a 3.XLVII de este sumario. Se sancionan. (Pág. 4967.)

4. Moción de orden formulada por la señora diputada *Zuccardi* de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de rendir homenaje a la memoria de la ex senadora nacional *Margarita Malharro de Torres*. Se aprueba. (Pág. 4967.)

5. Homenaje a la memoria de la ex senadora nacional *Margarita Malharro de Torres*. (Pág. 4967.)

6. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Previsión y Seguridad Social y de Justicia en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre régimen de solidaridad previsional y reformas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (55-P.E.-94). Se aprueba en general y se resuelve el aplazamiento de la consideración en particular. (Pág. 4970.)

7. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Previsión y Seguridad Social en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se modifica el régimen del contrato de trabajo (57-P.E.-94). Se sanciona con modificaciones. (Pág. 4998.)

8. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley en revisión sobre Código Nacional Electoral (158-S.-94). Se pasa a cuarto intermedio. (Pág. 5034.)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Viechi. — Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical adhiere a la moción de orden formulada por el señor diputado por La Pampa.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Ibarreche. — Señor presidente: simplemente quiero pedir una aclaración al señor presidente de la bancada Justicialista, quien en su argumentación para formular la moción de orden señaló que no se estaba en condiciones políticas para avanzar sobre la resolución integral del tema.

Quisiera llevarme la tranquilidad de que si esta solución política no surge de esta Cámara tampoco emanará del ámbito del Poder Ejecutivo. No olvidemos que en los últimos tiempos las notas periodísticas nos han informado acerca de una permanente y diría casi extorsiva actitud del Poder Ejecutivo de amenazar por medio de decretos de necesidad y urgencia ante la falta de dinámica de este cuerpo.

Nosotros participamos del consenso al que se ha arribado. Creemos que esta "súper ley" —inconstitucional e ilegítima en la mayoría de sus pretensiones— ha sido soslayada. En consecuencia, la actitud constructiva de esta Cámara ha sido precisamente la de evitar que se transforme en ley el proyecto bosquejado por el Poder Ejecutivo.

Quiero llevarme la tranquilidad de que esta *impasse* hasta el 8 de febrero no traerá aparejadas otras sorpresas de naturaleza política.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: nuestro bloque también apoya la moción formulada por el señor diputado por La Pampa.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Fernández Meijide. — Señor presidente: en nombre de bloque Alternativa Federal adherimos a la moción de orden formulada por el señor diputado por La Pampa.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado por La Pampa.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda aprobada la moción.

7

MODIFICACION DEL REGIMEN DE CONTRATO DE TRABAJO

(Orden del Día N° 1.113)

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación del Trabajo y de Previsión y Seguridad Social han considerado el mensaje y proyecto de ley modificatorio del Régimen de Contrato de Trabajo (t.o. 1976), reglamentando el "período de prueba", el "contrato de trabajo a tiempo parcial", el "contrato especial de fomento de empleo", y el "contrato de aprendizaje"; y por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,

Artículo 1º — Incorporase como artículo 92 bis del Régimen de Contrato de Trabajo (LCT, t.o. 1976), el siguiente:

Artículo 92 bis: *Período de prueba.* El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba, durante los primeros tres (3) meses. Los convenios colectivos de trabajo podrán ampliar dicho plazo hasta seis (6) meses. En ambos casos se aplicarán las reglas siguientes:

1. Un mismo trabajador no podrá ser contratado con período de prueba, por el mismo empleador, más de una vez.
2. El empleador deberá registrar el contrato a prueba en el libro especial del artículo 52 de esta ley y en el Sistema Único de Registro Laboral.
3. Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones propios de la categoría o puesto de trabajo que desempeña, incluidos los derechos sindicales, con las excepciones que se establecen en este artículo.
4. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante el período de prueba sin expresión de causa y sin derecho a indemnización alguna con motivo de la extinción.
5. El empleador y el trabajador estarán obligados al pago de los aportes y contribuciones para obras sociales y asignaciones familiares y exentos de los correspondientes a jubilaciones y pensiones, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y Fondo Nacional de Empleo.
6. El trabajador tendrá derecho durante el período de prueba a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo, incluidos

los derechos establecidos para el caso de accidente o enfermedad inculpaible, con excepción de lo prescrito en el cuarto párrafo del artículo 212 de esta ley.

7. Si el contrato continuara luego del período de prueba, éste se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de seguridad social.
8. Los convenios colectivos de trabajo podrán establecer porcentajes en relación a la contratación de trabajadores a prueba así como la prioridad para el ingreso en el supuesto de incremento de la planta efectiva.

Art. 2º — Agréguese como artículo 92 ter del Régimen de Contrato de Trabajo (LCT, t.o. 1976), el siguiente:

Artículo 92 ter: Contrato de trabajo a tiempo parcial.

1. El contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana o al mes, inferiores a las dos terceras (2/3) partes de la jornada habitual de la actividad. En este caso la remuneración no podrá ser inferior a la proporcional que le corresponda a un trabajador a tiempo completo, establecida por ley o convenio colectivo, de la misma categoría o puesto de trabajo.
2. Los trabajadores contratados a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias, salvo el caso del artículo 89 de la presente ley.
3. Las cotizaciones a la seguridad social y las demás que se recaudan con ésta, se efectuarán en proporción a la remuneración del trabajador y serán unificadas en caso de pluriempleo. En este último supuesto, el trabajador deberá elegir entre las obras sociales a las que aporte, a aquella a la cual pertenecerá.
4. Las prestaciones de la seguridad social se determinarán reglamentariamente teniendo en cuenta el tiempo trabajado, los aportes y las contribuciones efectuadas. Las prestaciones de obra social serán las adecuadas para una cobertura satisfactoria en materia de salud, aportando el Estado los fondos necesarios a tal fin, de acuerdo al nivel de las prestaciones y conforme lo determine la reglamentación.
5. Los convenios colectivos de trabajo podrán establecer para los trabajadores a tiempo parcial prioridad para ocupar las vacantes a tiempo completo que se produjeran en la empresa.

contratación de trabajadores mayores de 40 años, de discapacitados, de mujeres y de ex combatientes de Malvinas, bajo las siguientes condiciones y efectos:

1. Este contrato especial, que deberá celebrarse por escrito y registrarse en el libro del artículo 52 del Régimen de Contrato de Trabajo (LCT, texto ordenado en 1976) y en el Sistema Unico de Registro Laboral, tendrá una duración mínima de seis (6) meses prorrogables por períodos de seis (6) meses y una duración máxima de dos (2) años. No se requerirá el registro a que se refiere el artículo 18, inciso b) de la ley 24.013.
2. Los empleadores que celebren este tipo de contratos serán eximidos del cincuenta por ciento (50 %) de las contribuciones patronales al sistema de seguridad social, excepto obras sociales. El Poder Ejecutivo, podrá suprimir o modificar estas exenciones con carácter general o para áreas geográficas, actividades o categorías de beneficiarios determinadas.
3. Estos contratos se extinguirán por el mero cumplimiento del plazo pactado sin necesidad de otorgar preaviso y la extinción no generará obligación indemnizatoria alguna a favor del trabajador.
4. Salvo lo que se pactare en convenio colectivo de trabajo, la ruptura del contrato de trabajo por el empleador antes del vencimiento del plazo pactado sin causa justificada dará lugar a la aplicación del artículo 245 del Régimen de Contrato de Trabajo (LCT, texto ordenado en 1976).
5. La condición de discapacitado o ex combatiente de Malvinas deberá acreditarse mediante certificado expedido por la respectiva autoridad competente.

Art. 4º — Contrato de aprendizaje.

1. El aprendizaje es una relación contractual especial que vincula a un empresario y a un joven sin empleo generando los derechos y obligaciones que se especifican en el presente, bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
2. La relación de aprendizaje tendrá una duración mínima de tres (3) meses y una duración máxima de veinticuatro (24) meses.
3. Podrán participar de este tipo de relación:
 - a) Los empresarios que se inscriban en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y cumplan con los demás requisitos que se establezcan para cubrir la diversidad de situaciones;
 - b) Los jóvenes sin empleo entre catorce (14) y veinticinco (25) años.

4. Los empresarios suscribirán, en cada caso, un contrato obligándose a satisfacer la finalidad

Art. 3º — Modalidad especial de fomento del empleo. Como medida de fomento del empleo se autoriza la

formativa de la relación de aprendizaje y sometiéndose al régimen que apruebe la autoridad de aplicación.

5. El aprendizaje se obliga a cumplir las tareas que lo encomiende el empresario relacionadas con el aprendizaje, asistiendo regularmente al establecimiento durante el tiempo que determine la autoridad de aplicación, que en ningún caso podrá superar las seis (6) horas diarias o las treinta y seis (36) semanales.
6. El monto de la compensación que deberá recibir el aprendiz no podrá ser inferior al mínimo del convenio colectivo de trabajo aplicable a la tarea desempeñada. En ningún caso, el monto podrá ser inferior al del salario mínimo vital horario por cada hora de aprendizaje.
7. El aprendiz deberá contar con una cobertura por los riesgos que pudiese sufrir en el lugar y en ocasión del aprendizaje.
8. El empresario deberá entregar al aprendiz un certificado que acredite la experiencia o especialización adquirida.
9. Las comisiones negociadoras de los convenios colectivos reglamentarán los porcentajes máximos del plantel total permanente que podrá ser cubierto por estos contratos, según la cantidad de personal, el sector de actividad, las demandas de capacitación u otros criterios afines. En ese mismo ámbito se podrán acordar programas y procedimientos conjuntos de formación profesional que adapten esta modalidad de contratación a las características propias de la actividad, rama o empresa de que se trate.

Art. 5º — La Comisión de Seguimiento creada por el Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social (punto 15) del 23 de julio de 1994 suscrita por el gobierno nacional, la CGT y las cámaras empresariales evaluará anualmente el desarrollo de estas modalidades y su impacto real en la generación de empleo.

Como consecuencia del informe anual, la comisión podrá proponer las reformas y modificaciones que aseguren los objetivos consensuados de promoción y defensa del empleo productivo.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saló de las comisiones, 14 de diciembre de 1994.

Oswaldo Borda. — Carlos A. Sueiro. — Delfor A. Giménez. — Luis S. Cuervo. — María E. Benzi. — Naldo R. A. Brunelli. — Eduardo O. Camaño. — José L. Castiello. — Regelo R. Cordera. — Roberto S. Dignin. — Germán L. Kammerath. — Lorenzo A. Pepe. — María A. Salina. — Gerardo A. Schattini. — Orlando A. Zaccarini.

En disidencia parcial:

Elsa I. Maidana. — Rodolfo M. Gazia.

En disidencia total:

Alcides H. López. — Eduardo A. Santín. — Elsa I. Maidana. — Rodolfo M. Gazia. — Ricardo E. Marcos. — Pedro J. Novau. — Rafael M. Pascual.

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación del Trabajo y de Previsión y Seguridad Social, al considerar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifica el Régimen de Contrato de Trabajo (t.o. 1976), reglamentando el "período de prueba", el "contrato de trabajo a tiempo parcial", "el contrato especial de fomento del empleo", y el "contrato de aprendizaje", creen innecesario abundar en más detalles que los expuestos en el mensaje del Poder Ejecutivo que la acompaña, a los cuales se remiten.

Oswaldo Borda.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1994.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración un proyecto de ley que introduce diversas modificaciones en la regulación jurídica de las relaciones individuales del trabajo, cuyos fundamentos se exponen a continuación.

El 25 de julio de 1994 el Poder Ejecutivo juntamente con las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores, suscribió el "Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social", constituido por un conjunto de acciones que tienen como objetivos centrales "la creación de empleo, el incremento de la competitividad de nuestra economía y la introducción de nuevos elementos de equidad social".

Si bien el compromiso tripartito asumido en esa oportunidad perfeccionó consensos sobre diversas materias, puso como objetivo nacional prioritario e irrenunciable la creación de empleo productivo en cantidad suficiente para absorber a los demandantes de trabajo. Para ello elaboró un catálogo de temas que debían ser objeto de una nueva regulación o de modificación legislativa, entre los cuales se hallan los que forman el cuerpo del proyecto que hoy se somete a vuestra consideración, éstos son, el período de prueba, el contrato de trabajo a tiempo parcial, el contrato de aprendizaje y una modalidad especial de fomento del empleo destinada a promover la contratación de trabajadores mayores de 40 años, de inactivos, de mujeres y de ex combatientes de Malvinas.

El período de prueba —vigente en la actualidad sólo en estatutos especiales destinados a trabajadores determinados— se introduce por primera vez en el Régimen de Contrato de Trabajo (LCT, texto ordenado en 1976) que constituye el régimen general de regulación de las relaciones individuales de trabajo, y que, por consiguiente, abarca a las mayoría de los trabajadores depre-

clientes. La institución que se regula tiene como finalidad principal facilitar la entrada de nuevos trabajadores en el mercado de trabajo estimulando su contratación por parte de las empresas a cuyo fin se habilita un período de tres (3) meses —ampliable a seis (6) meses por convenio colectivo— dentro del cual el empleador podrá apreciar si el trabajador tiene las habilidades y destrezas necesarias para cubrir en forma definitiva el puesto de trabajo requerido. La prohibición de uso de este período de prueba en la legislación general vigente trajo aparejado que muchas veces la contratación de nuevos trabajadores por parte de vastos sectores de empleadores se realice en la práctica por caminos desviados —a través de contrataciones “en negro”— luego de lo cual, transcurrido un lapso variable y verificada su idoneidad para el puesto de trabajo, se transforme a los trabajadores admitidos en “efectivos”. Esta vía irregular de contratación vulnera el orden público, resulta generadora de conflictos, desprotege al trabajador y sustrae fondos al sistema de seguridad social.

El nuevo régimen que se propone prevé una extensión temporal suficiente para que el empleador pueda calibrar con certeza las calidades profesionales del trabajador contribuyendo, en esta forma, a mejorar la organización del trabajo y la productividad de la empresa, evitando los trastornos que generan los cambios irregulares. Por otro lado, en el régimen de prueba que se proyecta, el trabajador debe ser registrado, está protegido por el convenio colectivo de la actividad y las demás normas regulatorias del trabajo subordinado, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades inculpables, gozando asimismo de algunas prestaciones de la seguridad social como las asignaciones familiares y los servicios de las obras sociales. El período de prueba oximo al empleador de las aportaciones en materia de jubilaciones y pensiones, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y Fondo Nacional de Empleo y no le ocasione consecuencias indemnizatorias mientras dura el período de selección, lo que estimula la contratación de nuevos trabajadores sin el temor a soportar cargas tributarias e indemnizatorias gravosas que actúan como disuasivo para efectuar nuevas contrataciones.

Por lo demás, la continuación de las prestaciones laborales más allá del período de prueba trae aparejada la consolidación de la contratación por tiempo indeterminado, haciendo computable como tiempo de servicio el lapso trabajado durante la prueba, a todos los efectos laborales y de la seguridad social.

El proyecto de ley que se propone a la aprobación de vuestra honorabilidad incluye también una regulación del contrato de trabajo a tiempo parcial.

Es la primera vez que en nuestra legislación se regula de una manera autónoma y específica esta modalidad de contratación. No es que ella se encuentre prohibida en la normativa vigente, pero se somete su instrumentación a exigencias y cargas irrazonables que han provocado que haya sido desechada por los empleadores, desde hace tiempo, como forma usual de contratación. Sin embargo, la experiencia extranjera, especialmente la de los países social y económicamente más avanzados,

nos revela que ésta es la vía actual más idónea para canalizar las expectativas laborales de vastas franjas de trabajadores —especialmente jóvenes y mujeres—, que no pueden o no están dispuestos a comprometer su fuerza laboral a tiempo completo. Se propone una regulación adecuada para cumplir los fines indicados, que sigue, en términos generales, los lineamientos que sobre la materia estableciera el reciente convenio aprobado en la LXXXI Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo celebrada en junio del corriente año y al que la representación gubernamental de nuestro país prestara su voto favorable.

Con el fin de eliminar los obstáculos que han inhibido al sector empresario de utilizar esta forma de contratación, el texto propuesto determina que la remuneración a abonar a un trabajador a tiempo parcial no podrá ser inferior a la proporcional que corresponda a un trabajador a tiempo completo de la misma categoría o puesto de trabajo. Igualmente la cotización a la seguridad social y las demás aportaciones que se recaudan juntamente con ella, se deberán efectuar en proporción a la remuneración del trabajador y deberán unificarse en caso de pluriempleo. Se garantiza al trabajador las prestaciones de la seguridad social, las que se establecerán reglamentariamente, pero teniendo en cuenta el tiempo trabajado y los aportes y contribuciones efectuados. Especialmente se garantiza al trabajador a tiempo parcial una cobertura satisfactoria en materia de salud a través de las prestaciones de la obra social que le corresponda para lo cual el Estado se compromete a aportar los fondos que fueren necesarios a tal fin.

El proyecto de ley acompañado introduce además una nueva modalidad de contratación promovida concebida para el fomento del empleo de trabajadores con especiales dificultades para insertarse o reinsertarse en el mercado de trabajo como son los mayores de 40 años, los minusválidos, las mujeres y los excombatientes de Malvinas. Esta modalidad promovida se agrega a las ya vigentes a partir de la Ley Nacional de Empleo 24.013, pero a diferencia de las previstas en esta última ley, se han suprimido aquellos requisitos que dificultan su efectiva utilización o que se estiman innecesarios o inconvenientes o que implican cargas administrativas adicionales. Tal el caso, por ejemplo, de la exigencia de la habilitación por convenio colectivo o emergencia ocupacional, la de un porcentaje máximo con relación al plantel permanente de la empresa, y la del registro del contrato, entre otras exigencias eliminadas.

Por último, se crea la figura del contrato de aprendizaje como relación contractual especial que vincula a un empresario y a un joven sin empleo de entre catorce (14) y veinticinco (25) años, bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se trata de una figura contractual no laboral a la que se aplican, sin embargo, algunas normas protectorias como las que señalan la duración mínima y máxima del contrato, el monto mínimo de la compensación que deberá recibir el aprendiz y la exigencia referida a que el aprendiz cuente con una cobertura por los riesgos que pudiese sufrir en el lugar y en ocasión del aprendizaje. El encuadre normativo de esta figura es lo suficientemente amplio como para abarcar diversidad de situaciones

que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social irá delineando en detalle, según sean las características del aprendizaje, las zonas y actividades en que éste se produzca y la formación y capacitación previa del aprendiz.

Se trata de preservar en todo caso la finalidad formativa del contrato de aprendizaje teniendo como objetivo principal que el aprendiz adquiera una experiencia o especialización que lo habilite a ingresar con ventaja y de modo definitivo en el mercado de trabajo.

Las propuestas normativas que se incluyen en el presente proyecto de ley tienden todas a mejorar la situación del empleo en nuestro país. Sin perjuicio del órgano de seguimiento que pudiere crear, a los mismos efectos, vuestra honorabilidad, el Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social, como fruto de la concertación social, ha concebido una comisión de seguimiento integrada por tres (3) representantes del gobierno, tres (3) representantes de la Confederación General del Trabajo y tres (3) representantes de las organizaciones empresarias, cuyo cometido principal consistirá en monitorear, observar y evaluar el desenvolvimiento de las medidas acordadas y, especialmente, el impacto que ellas produzcan sobre el empleo. Esta comisión ha de observar estrechamente la evolución que las medidas proyectadas tengan una vez sancionadas y el cumplimiento de los objetivos que justificaron su sanción, a fin de proponer, en su caso, las correcciones, sustituciones o modificaciones que las circunstancias aconsejen.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

CARLOS S. MENEM.

José A. Caro Figueroa. — Domingo F. Cavallo.

FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA PARCIAL

Señor presidente:

En tiempo y forma, no obstante mi posición en general al proyecto de ley modificatorio del Régimen del Contrato de Trabajo, en lo referente a "período de prueba", "contrato de trabajo a tiempo parcial", "contrato especial de fomento de empleo" y "contrato de aprendizaje", quiero dejar expresada mi opinión particular considerando ciertos aspectos de este proyecto que creo equivocados.

1. — *Amplitud del período de prueba.* En primer lugar y respecto al período de prueba fijado en tres meses, permitiendo a los convenios colectivos ampliar dicho período a seis meses, considero el período ampliatorio permitido excesivamente amplio, generando una inseguridad jurídica injustificada. En su virtud, propongo que no se pueda ampliar el período de prueba de tres meses en la contratación de obreros no calificados; se permita una ampliación de un mes más sobre el período de prueba base para la contratación de obreros calificados y empleados y de dos meses para personal de alta calificación.

2. — *Aportes y contribuciones al sistema previsional.* En el artículo 1º que incorpora el artículo 92 bis, punto 5, se establece que durante el período de prueba estarán tanto el trabajador como el empleador, exentos del pago de aportes y contribuciones al sistema previsional.

Es evidente que siempre existirá déficit previsional y que nunca será posible lograr un aumento de los haberes pasivos mínimos, si se reducen los ingresos afectados al sostenimiento del sistema. En su virtud, propongo eliminar este beneficio adicional a los empleados, para los que ya la sola implementación del período de prueba supone un avance en sus reivindicaciones o en su defecto establece una compensación económica de compensación al sistema previsional.

3. — *Contratos de fomento de empleo.* En el artículo 3º, punto 2, se establece que en los contratos de fomento de empleo, los empleadores estarán eximidos del 50 % de las contribuciones patronales al Sistema de Seguridad Social. Cabría la misma observación que en el punto anterior. Sin embargo, en este caso es más justificada toda vez que en el caso anterior se trata de un período de prueba de un contrato por tiempo indeterminado mientras que en el caso de contratos de fomento estamos en presencia de empleo precario con contratos de tiempo determinado. En su virtud propongo que este tipo de incentivos como herramienta de fomento al empleo, se reserven para la promoción de empleo estable y siempre bajo la condición de nutrir al sistema previsional con fondos provenientes de otras fuentes de financiación que compensen la utilización de este tipo de medidas.

4. — *Contrato de aprendizaje.* En el artículo 4º, punto 1, se define al "aprendizaje" como una relación contractual especial, y entiendo que en una correcta técnica legislativa debería encuadrarse el aprendizaje dentro de los contratos laborales y, por lo tanto, amparado por todo el ordenamiento jurídico laboral. Asimismo el proyecto en forma tácita, también elimina en los contratos de aprendizaje los aportes y contribuciones al sistema previsional.

Sin más, saludo a usted muy atentamente.

Rodolfo M. Gazia.

ANTECEDENTE

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — Sustitúyese el artículo 92 del Régimen de Contrato de Trabajo LCT (t.o 1976), por el siguiente:

Artículo 92: *Período de prueba.*

El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros tres (3) meses. Los convenios colectivos de trabajo podrán ampliar dicho plazo hasta seis (6) meses. En tales casos se aplicarán las reglas siguientes:

1. Un mismo trabajador no podrá ser contratado con período de prueba, por el mismo empleador, más de una vez.
2. El empleador deberá registrar el contrato a prueba en el libro especial del artículo 52 de

esta ley y en el Sistema Único de Registro Laboral.

3. Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones propios de la categoría o puesto de trabajo que desempeñe, incluidos los derechos sindicales, con las excepciones que se establecen en este artículo.
4. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante el período de prueba sin expresión de causa y sin derecho a indemnización alguna con motivo de la extinción.
5. El empleador y el trabajador estarán obligados al pago de los aportes y contribuciones para obras sociales y asignaciones familiares y exentos de los correspondientes a jubilaciones y pensiones, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y Fondo Nacional de Empleo.
6. El trabajador tendrá derecho durante el período de prueba a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo, incluidos los derechos establecidos para el caso de accidente o enfermedad inculpaible, con excepción de lo prescrito en el cuarto párrafo del artículo 212 de esta ley.
7. Si el contrato continuara luego del período de prueba éste se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social.
8. Los convenios colectivos de trabajo podrán establecer porcentajes en relación a la contratación de trabajadores a prueba, así como la prioridad para el ingreso en el supuesto de incremento de la planta efectiva.

Art. 2º — Agréguese como artículo 92 bis del Régimen de Contrato de Trabajo (LCT, t.o. 1976), el siguiente:

Artículo 92 bis: *Contrato de trabajo a tiempo parcial.*

1. El contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana o al mes, inferiores a las dos terceras (2/3) partes de la jornada habitual de la actividad. En este caso la remuneración no podrá ser inferior a la proporcional que le corresponda a un trabajador a tiempo completo, establecida por ley o convenio colectivo, de la misma categoría o puesto de trabajo.

2. Los trabajadores contratados a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias, salvo el caso del artículo 89 de la presente ley.

3. La cotización a la seguridad social y las demás aportaciones que se recaudan juntamente con ésta, se efectuarán en proporción a la remuneración del trabajador y serán unificadas en caso de pluriempleo.

4. Las prestaciones de la seguridad social se determinarán reglamentariamente teniendo en cuenta el tiempo trabajado, los aportes y las contribuciones efectuadas. Las prestaciones de obra social serán las adecuadas para una cobertura satisfactoria en materia de salud. El Estado aportará los fondos necesarios a tal fin conforme lo determinará la reglamentación.

5. Los convenios colectivos de trabajo podrán establecer para los trabajadores a tiempo parcial prioridad para ocupar las vacantes a tiempo completo que se produjeran en la empresa.

Art. 3º — *Modalidad especial de fomento del empleo.*

Como medida de fomento del empleo se autoriza la contratación de trabajadores mayores de 40 años, de minusválidos, de mujeres y de ex combatientes de Malvinas, bajo las siguientes condiciones y efectos:

1. Este contrato especial, que deberá celebrarse por escrito y registrarse en el libro del artículo 52 del Régimen de Contrato de Trabajo (LCT, t.o. 1976) y en el Sistema Único de Registro Laboral, tendrá una duración mínima de seis (6) meses prorrogables por períodos de seis (6) meses y una duración máxima de dos (2) años. No se requerirá el registro a que se refiere el artículo 18, inciso b), de la ley 24.013.

2. Los empleadores que celebren este tipo de contratos serán eximidos del cincuenta por ciento (50 %) de las contribuciones patronales al sistema de seguridad social, excepto obras sociales. El Poder Ejecutivo podrá suprimir o modificar estas exenciones con carácter general o para áreas geográficas, actividades o categorías de beneficiarios determinadas.

3. Estos contratos se extinguirán por el mero cumplimiento del plazo pactado sin necesidad de otorgar preaviso y la extinción no generará obligación indemnizatoria alguna a favor del trabajador.

4. Salvo lo que se pacte en convenio colectivo de trabajo, la ruptura del contrato de trabajo por el empleador antes del vencimiento del plazo pactado sin causa justificada dará lugar a la aplicación del artículo 245 del Régimen del Contrato de Trabajo (LCT, t.o. 1976).

5. La condición de minusválido o ex combatiente de Malvinas deberá acreditarse mediante certificado expedido por la respectiva autoridad competente.

Art. 4º — *Contrato de aprendizaje.*

1. El aprendizaje es una relación contractual especial que vincula a un empresario y a un joven sin empleo generando los derechos y obligaciones que se especifican en el presente, bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

2. La relación de aprendizaje tendrá una duración mínima de tres (3) meses y una duración máxima de veinticuatro (24) meses.

3. Podrán participar de este tipo de relación:

a) Los empresarios que se inscriban en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y cumplan con los demás requisitos que se establezcan para cubrir la diversidad de situaciones;

b) Los jóvenes sin empleo de entre catorce (14) y veinticinco (25) años.

4. Los empresarios suscribirán, en cada caso, un contrato obligándose a satisfacer la finalidad formativa de la relación de aprendizaje y sometiéndose al régimen que apruebe la autoridad de aplicación.

5. El aprendiz se obliga a cumplir las tareas que le encomiende el empresario relacionadas con el aprendizaje, asistiendo regularmente al establecimiento durante el tiempo que determine la autoridad de aplicación, que en ningún caso podrá superar las seis (6) horas diarias o las treinta y seis (36) semanales.

6. El monto de la compensación que deberá recibir el aprendiz no podrá ser inferior al del salario mínimo vital horario por cada hora de aprendizaje.

7. El aprendiz deberá contar con una cobertura por los riesgos que pudiere sufrir en el lugar y en ocasión del aprendizaje.

8. El empresario deberá entregar al aprendiz un certificado que acredite la experiencia o especialización adquirida.

Art. 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CARLOS S. MENEM.

José Caro Figueroa. — Domingo F. Cavallo.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente: la Nación vive un problema agobiante, especialmente para quienes lo padecemos: me refiero a la falta de trabajo.

En el mundo entero se está produciendo este desequilibrio y en los países más desarrollados del planeta aún no se encuentran soluciones estructurales para paliar dicho inconveniente, a pesar de la riqueza de recursos y del alto acatamiento a los pactos sociales imperantes en esas sociedades.

Como toda creación humana el desarrollo tecnológico tiene fallas que lamentablemente están redundando en los aspectos sociales, produciendo expulsiones en el campo laboral que aumen-

tan la desocupación. En la propia Europa el empresario recurre al desmantelamiento de fábricas en sus países de origen para trasladarlas a la periferia más cercana, donde el costo laboral es sensiblemente más bajo y el flete no incide demasiado en el valor final del producto. Con este esquema miles de puestos de trabajo se pierden en la Comunidad Económica Europea, tan proclive a considerarse a sí misma como el adalid de la justicia y el sentido común.

Las declamaciones no sirven para crear fuentes de trabajo; son ociosas. Por eso buscamos formas concretas de abrir el mercado laboral, permitiendo que ingrese la mayor cantidad de gente posible, sin agredir al Régimen de Contrato de Trabajo. Buscamos resolver problemas porque para eso somos los representantes del pueblo. No creo que haya gobierno alguno sobre la faz de la Tierra que se complazca en racionar.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio a efectos de que podamos escuchar al orador.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Pero éstos no son tiempos de abundancia aquí ni en las más poderosas naciones.

Las comisiones de Legislación del Trabajo y de Previsión y Seguridad Social han considerado el mensaje y proyecto de ley modificatorio del régimen de contrato de trabajo remitido por el Poder Ejecutivo, reglamentando modalidades tendientes a generar puestos de trabajo con sistemas de promoción que alcanzan a los más perjudicados actores sociales en este campo: las mujeres, los excombatientes de Malvinas, los discapacitados y los hombres mayores de 40 años, para quienes pareciera que el hecho de llegar a la mitad de la vida sin trabajo se asemeja a una condena de muerte.

Este proyecto ofrece también una oportunidad a los más jóvenes porque se incluye la contratación de aprendices. De esta manera se contacta al principiante con el mundo del trabajo, se le permite reunir experiencia y prepararse para asumir su madurez con la formación necesaria que supone la entrada a un nuevo milenio con bastantes dudas y mucha competencia.

Este es el mundo y el país que nos toca vivir, y brindamos las soluciones en el mero real porque en política la acción reemplaza los sueños y las declamaciones.

Frente al grave problema de la desocupación, en las comisiones hemos encontrado una

oposición que apoya con matices el proyecto, porque sabe que más allá de las divergencias, en el campo del trabajo existe un problema acuciante que se debe resolver.

El acuerdo marco para el empleo, la productividad y la equidad social suscrito el 25 de julio de 1994 entre el gobierno, la CGT y las cámaras empresariales ha sido la base para elaborar esta iniciativa. Creemos que éste es el camino más apto para encontrar una salida a la desocupación y evitar que proliferen la desesperanza. En nuestro país la falta de trabajo reviste características altamente importantes en razón de su vínculo con una ociosidad peligrosa en la juventud o la limitación del subempleo temporario y en negro, conocido como la changa, así como también la marginación de la mujer, del discapacitado, del hombre mayor de 40 años y de nuestros soldados de Malvinas. Todo ese conjunto social —muy importante, por cierto— tendrá con esta ley el derecho a la oportunidad.

Incorporamos el período de prueba, que representa a su vez una forma de blanqueo en los puestos de trabajo, durante el cual los trabajadores tendrán los derechos y obligaciones propios de la categoría y del puesto de trabajo que desempeñan, además del derecho a las prestaciones por accidente o enfermedad de trabajo, incluido el establecido para el caso de accidente o enfermedad inculpable. Por otra parte, de continuar el trabajador en su puesto de trabajo el período de prueba se computará como tiempo de servicio.

La nueva modalidad de fomento del empleo para trabajadores de más de 40 años, mujeres, discapacitados y excombatientes de Malvinas se inscribe en el marco de la más estricta realidad, porque es precisamente en esos sectores donde el flagelo del desempleo golpea con más dureza.

También creemos que el sistema del período de prueba, contrato de trabajo a tiempo parcial y contrato de aprendizaje fomentará el acceso a un trabajo digno.

Hoy decimos que un puesto de trabajo es una oportunidad. No podemos permitirnos perder más tiempo ante una realidad agobiante. Esta norma obedece a una coyuntura y no a un deseo.

La Argentina de hoy es otra y la bonanza sólo se recuperará con creatividad e imaginación, y fundamentalmente con menos discursos de ética acomodaticia y palabras huecas que no cubren ni siquiera las expectativas de conseguir un simple puesto de trabajo.

Estas son las consideraciones que nos mueven a solicitar a la Honorable Cámara la aprobación del proyecto de ley en tratamiento.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. López (A. II.). — Señor presidente: desde la vicepresidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo hemos resistido junto con otros integrantes de mi bloque y algunos miembros opositores —desde que ingresé a esta Cámara de Diputados de la Nación en 1991— todos los proyectos de flexibilización laboral presentados por el Poder Ejecutivo nacional.

Hemos logrado que caigan sucesivamente todos los proyectos que pretendieron otorgar precariedad al empleo en la República Argentina; a veces lo conseguimos con el acompañamiento de los miembros de origen sindical del bloque Justicialista, de la propia comisión, o incluso con el del resto de los partidos opositores. Conseguimos así que no se sancionaran leyes como aquella de más de 300 artículos con que nos sorprendió el ministro Rodríguez ni bien se hizo cargo del Ministerio de Trabajo; ley que pretendía modificar la estructura misma del sistema laboral argentino, quebrando de alguna manera los pilares básicos que hacen que sea realmente una rama autónoma del derecho y que en cierto modo tienden a equilibrar las posiciones entre el patrón y el empleado. De esto se trata: de proteger a la parte más débil de la relación.

Hemos logrado que no se sancione en su momento aquel proyecto de 18 artículos, que en una condensación de los otros 365 de alguna manera rompía también esos pilares básicos del derecho laboral y lo que se refiere a su instrumentación como rama autónoma en el derecho comparado.

Hemos logrado que no se flexibilice el tiempo de trabajo, porque en la iniciativa que se encuentra a consideración del cuerpo esto tampoco se permite. Del mismo modo hemos logrado que no quede sujeta a la voluntad del patrón la flexibilización de las vacaciones especiales o anuales, porque tampoco figura esto en el proyecto en análisis.

De allí que desde nuestra óptica, pese a no estar de acuerdo con este texto legal que nos ocupa, pese a haber votado en disidencia total en el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo y pese a que nuestro bloque ha presentado una legislación alternativa que será explicitada por quienes me sucedan en el uso de la palabra, hemos triunfado en la defensa de los derechos de los trabajadores, con el acompañamiento a veces de miembros del bloque de la mayoría

que integran esa comisión y siempre con el apoyo de las fuerzas políticas y sociales que conforman la oposición.

Sin embargo, debo decir que no hemos logrado que estas últimas sean convocadas para dar su opinión en el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo. No hemos sido escuchados en el acuerdo marco que en julio instrumentaron la CGT, la UIA y el gobierno nacional.

Esto nos llena de pesadumbre porque significa soslayar la actividad del Parlamento. Cuando el señor ministro de Trabajo concurrió al bloque de la Unión Cívica Radical en el mes de agosto a fin de instarnos a apoyar esta iniciativa, le hicimos conocer nuestra oposición, y delante de los representantes de la UIA y la CGT le dijimos que queríamos participar de las deliberaciones que se llevasen a cabo aunque fuera en calidad de oyentes. Pero no fue así y la semana pasada el ministro de Trabajo nos prometió que en las siguientes reformas laborales seríamos escuchados. Pero tampoco será así porque, tras una reunión que fracasó y que debía realizarse hoy en el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo, el año que viene deberemos analizar un proyecto de ley de accidentes de trabajo que ya ha llegado al Parlamento y en cuya redacción no hemos sido tenidos en cuenta. Evidentemente también será objeto de una férrea oposición de la Unión Cívica Radical.

No hay duda de que el bloque de la mayoría tiene número suficiente para aprobar el proyecto contenido en el dictamen. Insistiremos con nuestro proyecto alternativo, a pesar de que seguramente se aprobará la iniciativa que ha informado a la Cámara el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo.

No lo hubiéramos querido así. No deseamos que se posibilite una flexibilización que redundará en la precariedad del empleo de las mujeres y los jóvenes, quienes recibirán menor retribución, no tendrán cobertura suficiente en materia de salud ni percibirán los beneficios de la legislación previsional.

Esto nos llena de pesadumbre. Sabemos que el momento que vivimos es tremendo para el oficialismo, porque si en algo ha fracasado este gobierno, y especialmente los ministerios de Economía y de Trabajo —pese a que este Parlamento les votó anteriormente otras leyes que fueron modificando el régimen de contrato de trabajo— es en la creación de empleo. No hay empleo en la Argentina; la desocupación es cada vez mayor y en las ciudades importantes del país la desocupación es tremenda.

Algunos de los diarios del domingo reflejaban la desocupación en Rosario y hablaban de la no querida pero posible explosión social que pueden provocar estos índices de desocupación en esa ciudad santafesina y en el país. Estos índices de desocupación ya los tiene el INDEC pero no han sido dados a conocer en este momento en que están en funciones los representantes del pueblo de la República. El ministerio ha dicho que recién los dará en enero porque evidentemente el gobierno quiere contar con alguna herramienta que podría o no servir para tratar de paliar los efectos que van a causar en la opinión pública. Esos índices de desocupación son altos y crecerán el año que viene. Incluso pienso que este instrumento no va a permitir que esos índices bajen, porque no se puede crear empleo mediante una ley en ninguna parte del mundo y menos en la Argentina.

No queremos esta flexibilización laboral en el marco de esta política económica. No queremos una flexibilización laboral a cualquier precio y sobre todo que afecte a las mujeres y a los jóvenes, que van a ser contratados con menores salarios y derechos.

Nos hemos opuesto frontalmente al proyecto y así lo van a sostener, seguramente con más claridad y mejores conceptos, otros diputados de mi bloque. Pero aunque sea sancionado este proyecto de ley, considero que hemos triunfado en muchísimos aspectos porque de cualquier manera quedan salvaguardados algunos valores fundamentales del derecho del trabajo que continuarán teniendo vigencia en la Argentina. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Estévez Boero. — Señor presidente: nuestro interbloque Alternativa Federal no comparte la filosofía de este proyecto porque no comparte la lectura de la realidad que da pie a esta iniciativa de flexibilización laboral. Nosotros creemos que estudiando nuestra historia contemporánea no podemos responsabilizar de esta situación a la existencia de la legislación del trabajo, al "nuevo derecho" que pensara el maestro Alfredo Palacios y que se aplicara masivamente en el primer gobierno de Perón. No podemos nosotros culpar a estas instituciones —de las que solamente se privó a los peones rurales y al personal doméstico— por la falta de empleo pues aquel país con esa legislación marcó el desarrollo industrial más vertiginoso y la generación de empleo más alta de nuestra historia. Sin embargo, este país que no aplica esa legislación ni aun cuando está vigente, está mar-

cando los más altos índices de desempleo de nuestro tiempo. Por eso vamos hacia un país sin historia, sin identidad.

Se nos habla del cuento de la muerte de las ideologías, que en realidad es la muerte de los valores trascendentes de la solidaridad, para que quede el campo abierto a los valores del materialismo pragmático, del capitalismo salvaje. Nuestro país vive esta realidad de nuestros días, donde prima el valor del "sálvese quien pueda", "todos contra todos", un darwinismo social.

Como lo dijera Gunnar Myrdal hace mucho tiempo, creemos que la sociedad tiene dos alternativas fundamentalmente en las épocas de crisis: la práctica de la solidaridad o la desintegración. Nosotros vivimos el tiempo de la desintegración de nuestra sociedad, con una confrontación entre los que tienen poco y los que no tienen nada, y de estos últimos entre sí, para tratar de salvarse.

Nosotros no compartimos la idea de llevar a la gente el mensaje de que la solución de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y del campo pasa por la supresión de la estabilidad laboral, que no sólo es un dato contable sino que además incide fuertemente sobre el temperamento y la conducta de un ser humano, que es el trabajador.

Las estadísticas y los estudios sobre el tema de la estabilidad han demostrado que el trabajador que goza de ella y trabaja por un tiempo indeterminado no tiene que estar mostrando que sirve para realizar las tareas que se le han asignado, mientras que el trabajador que está en relación laboral por tiempo determinado necesita a cada momento demostrar sus cualidades para que lo tengan en cuenta cuando el contrato debe renovarse.

Durante la jornada laboral el trabajador por tiempo indeterminado las únicas preocupaciones que tiene son las personales y las de cumplir correctamente sus tareas. En cambio, el trabajador por tiempo determinado, además de ello permanentemente está observando si hay algún capataz o jefe que lo controla, lo cual lo distrae de su tarea. El trabajador por tiempo indeterminado prioriza la salud sobre el presentismo, pero el trabajador por tiempo determinado tiene que sentirse muy mal para poder tomar la decisión de faltar al trabajo, porque arriesga su nueva contratación. Frente a un accidente, e incluso un incidente, aquél no duda en denunciarlo; pero el que trabaja por tiempo determinado prefiere ir golpeado, accidentado, escondiendo su herida y su daño para que no se lo denuncie, por miedo a ser culpado.

Aclaro que estas afirmaciones no son hechas en el aire. Se han realizado estadísticas en fábricas cerca de las cuales viven compañeros que son diputados. Por ejemplo, en Metcon sobre un total de 607 operarios, el 76 por ciento correspondía a trabajadores por tiempo indeterminado y el 23 por ciento restante a trabajadores por tiempo determinado. Podemos ver la relación que existe entre la estabilidad y la capacitación en el trabajo y el problema de los accidentes, situación que se ve agravada en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que analizamos en la Comisión de Legislación del Trabajo. Entre quienes trabajan por contratos temporales el porcentaje de accidentes es mucho más alto. Por ejemplo, en junio de 1992 en esta empresa entre las personas que trabajan por tiempo indeterminado se registraron accidentes del orden del 1,075 por ciento mensual, mientras que entre quienes lo hacen por tiempo determinado el porcentaje fue del 5,6. En septiembre entre los primeros se registró un porcentaje del 0,65 mensual, en tanto que entre los mencionados en último término los accidentes alcanzaron el 6,3 por ciento mensual.

¿Cómo inciden estas modalidades del trabajo con respecto a los accidentes y cómo lo harán con la modificación que se pretende introducir llegando incluso hasta la privatización de la seguridad? Por supuesto la realidad que hoy vivimos se verá agravada con este proyecto al igual que —como lo señalamos en su oportunidad— la iniciativa sancionada referida a los aranceles profesionales. Además no son estas medidas las que determinan las posibilidades de empleo ni las que influyen en el costo argentino.

Para nosotros la solución pasa por apoyar a la pequeña y mediana empresa y a todo tipo de formación productiva cooperativa. Sin embargo, la legislación que debería dictarse para lograrlo no llega.

Asimismo el camino real pasa por lograr una política impositiva menos regresiva, que favorezca a la pequeña y mediana empresa, fundamentalmente del interior del país tanto de la ciudad como en el campo.

La solución para este problema se logrará mediante una política crediticia que signifique una palanca para la producción y la creación de puestos de trabajo en lugar de constituirse en un simple negocio financiero, así como también con una política arancelaria que tenga en cuenta a la sociedad en su conjunto y no sólo a concepciones fundamentalistas de la economía.

En la Comisión de Legislación del Trabajo hemos recibido en reiteradas oportunidades a delegaciones de la OIT a efectos de conversar

sobre el tema que hoy nos ocupa, y cuando les preguntamos acerca de si legislaciones similares a ésta lograron crear nuevos puestos de trabajo en otros países del mundo nunca pudieron contestarnos afirmativamente. Esa es la realidad, más allá de los buenos deseos.

Por otra parte, legislaciones de este tipo disminuyen la calidad de las condiciones de trabajo y no generan nuevos empleos.

Si bien el proyecto en consideración insiste en la flexibilización laboral con menor fuerza que iniciativas anteriores —como lo señalara el señor vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo—, de él se desprende que su verdadera finalidad no es otra que la de disminuir teóricamente los costos de la contratación laboral.

No debemos entrar en la variante de pensar que de esta forma se moderniza el derecho laboral. Aclaro que estamos de acuerdo en que se lo modernice, pero implementando otro tipo de medidas.

En más de una oportunidad se ha dicho que estamos blanqueando una realidad, pero en nuestra opinión no se puede legitimar con una ley la transgresión de otra norma. Tenemos que tratar de que funcionen las inspecciones de trabajo para que se cumplan las leyes, y no modificarlas para legalizar el incumplimiento.

En ese sentido observamos que a través de los contratos de aprendizaje será posible contratar a jóvenes de 14 a 25 años a razón de 200 pesos por mes sin derecho a percibir el mes de despido, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin licencias, sin límites al poder de dirección del empleador y sin derecho a recibir un trato igualitario, porque no tendrán un salario sino una compensación toda vez que a este tipo de contrato se lo saca del ámbito del derecho del trabajo, modificando así —en forma negativa— su naturaleza jurídica.

Esta precarización de las relaciones laborales va en contra de la necesidad de hacer eficiente el aparato productivo y de las conclusiones a las que ha arribado la ciencia moderna en el derecho laboral. No se crean nuevos puestos de trabajo sino que simplemente se permite la rotación de diversas personas en esos mismos puestos.

Por otra parte estamos en desacuerdo con las exenciones que se establecen al pago de determinados aportes y contribuciones porque ello hará disminuir los fondos que se utilizan para hacer frente a las jubilaciones y pensiones y al financiamiento de los Programas Intensivos de Trabajo. Además eso agravará el problema que se plantea con el incremento de la desocupación, porque existirán menos recursos para atender a este sector de la población.

Esta reforma también contempla que en determinados casos no se deberán hacer aportes previsionales, con lo cual se va afectar la futura jubilación que percibirá el trabajador, dado que va a contar con un menor tiempo de servicio y un aporte menor.

Con respecto a los trabajadores a prueba debería establecerse que tendrán prioridad para el ingreso en el supuesto de que se incremente la planta efectiva. Asimismo es menester que las prestaciones de obras sociales sean las adecuadas para una cobertura satisfactoria en materia de salud a fin de no dejar librado este tema al criterio del prestador de los servicios.

Es preciso tener en cuenta que la exención del 50 por ciento sobre los aportes patronales, que se establece para el caso de contratación de trabajadores mayores de 40 años, de mujeres y de ex combatientes de Malvinas, afectará el nivel de los fondos que se destinan a la ANSES. Al respecto no objetamos lo que se dispone en cuanto a los trabajadores discapacitados porque eso está en consonancia con lo que establece el artículo 34 de la ley 24.147.

Por estas razones respetuosamente llamamos la atención de los integrantes de esta Honorable Cámara para que nos inspiremos en nuestra realidad. Tengamos en cuenta que en 1904, cuando el país consideró que era necesario impulsar un cambio profundo en la legislación laboral, con menores posibilidades tecnológicas y bajo la inspiración de Joaquín V. González, se realizó un relevamiento real de la situación de los trabajadores a través del valioso estudio de Biallet Massé. En la actualidad eso no va a ser posible porque no existen estadísticas previas para luego determinar la efectividad de esta medida.

Nuestro bloque está de acuerdo con la modernización, pero ello no quiere decir que debemos marginar el derecho de información, que no está contemplado en esta iniciativa. El derecho a la capacitación tampoco figura en este proyecto. Lo mismo ocurre con la falta de compromiso de la patronal, que se beneficia con esta baja de costos sin obligarse a producir en forma concreta nuevos empleos o invertir en avances tecnológicos. Por eso, votaremos por la negativa este proyecto.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Fernández Gill. — Señor presidente: el bloque del MODIN dice no a este proyecto de flexibilización laboral y a la modificación sustancial de la actual ley de contrato de trabajo. Por eso prefirió presentar un proyecto alternativo que contempla un sistema transitorio.

Nuestra propuesta de reforma en materia laboral presenta una doble dirección. Queremos crear una comisión de expertos a fin de encontrar soluciones que realmente sean efectivas y tiendan a precisar la ambigüedad de algunos conceptos que por su imprecisión y amplitud pueden aumentar la litigiosidad.

También es necesario que esas soluciones permitan modificar el juego de los límites máximo y mínimo de las tarifas indemnizatorias por despido, que hoy generan una quiebra en la proporcionalidad entre la antigüedad y la indemnización. Se beneficia al que trabajó poco tiempo, en detrimento del que lo hizo durante muchos años.

Pretendemos establecer un plexo normativo de aplicación transitoria y caducidad automática. Por eso hablamos del carácter transitorio de nuestro proyecto, que tiende a hacer posible el proceso de reconversión tecnológica y organizativa de muchas empresas que necesitan adaptarse a las nuevas condiciones del sistema.

Nuestra propuesta, en términos generales, responde a los siguientes principios básicos. Nos regimos por una concepción filosófica del hombre, como un ser trascendente que encuentra en el trabajo una forma de realización personal y que alcanza su plenitud en la medida en que éste se desarrolla en una sociedad.

Aspiramos a un modelo de nación en el que la definición del rol del Estado y su intervención en las relaciones entre los hombres revisiten fundamental importancia.

Se requiere un diagnóstico objetivo de la realidad que se pretende modificar. No es lo mismo dictar una ley para crear empleo como propone el MODIN, que hacerlo para favorecer el aumento de la desocupación y la recesión, como desea el actual equipo económico.

Resulta necesario el sentido común. Estimamos que no vale la pena repetir experiencias que en otros países ya han fracasado. En España, por ejemplo, el Pacto de la Moncloa ha provocado una desocupación que ya supera el 22 por ciento. No podemos seguir copiando fracasos.

Queremos un protagonismo del Estado en el fomento y la promoción de actividades que permitan mejorar la balanza comercial.

Pretendemos definir la responsabilidad del Estado en la calidad de los recursos humanos, en base a criterios de equidad y capacidad.

Sostenemos el mantenimiento del principio de riesgo empresarial como predominante para determinar quién debe absorber las consecuencias del funcionamiento dinámico de los mercados,

que se encuentran en permanente adaptación y cambio.

Proponemos definir pautas y posibilidades de intercambio internacional, apuntando a esos sectores.

Queremos orientar el destino de la renta interna promoviendo créditos blandos, con la función de activar las pequeñas y medianas empresas, y todas aquellas actividades donde puedan obtenerse mayores ventajas comparativas, y salir a buscar nuevos mercados, sin perder los que ya tenemos. La búsqueda, y los eventuales compradores, tienen que estar influidos por nuestro interés, y de ningún modo quedar subordinados a los intereses de los Estados Unidos.

Queremos adoptar medidas sobre todo en materia de educación, que ayuden a una mayor igualdad de oportunidades, mediante una más equitativa distribución de la renta nacional.

No debemos permitir que el Estado abdique de sus responsabilidades en materia laboral, lo que surge claramente del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

El primer paso consiste en reconocer que estamos atravesando una situación de emergencia y que si no le ponemos frenos ahora entonces sí corremos el riesgo de que la desocupación, con todas sus secuelas, se vuelva incontrolable y genere todas las nefastas consecuencias que ello trae aparejado.

Por eso, y dado que todavía son controlables los efectos, vamos a empezar proponiendo una solución transitoria para la crisis. La idea es permitir ciertas liberalidades para quienes se adscriban al sistema, sin suprimir ni modificar el sistema vigente más que en lo necesario.

La crisis actual nos lleva a reconocer que, antes de la quiebra masiva de las empresas radicadas en el país, o del cierre definitivo de sus puertas, es necesario darles una oportunidad, limitada al plazo de tres años, para que se reconviertan.

Pero, que quede en claro, las formas contractuales que admitiremos para la coyuntura no podrán afectar las relaciones contractuales preexistentes, que seguirán rigiéndose por la normativa vigente, con los retoques que aquí hemos sugerido. De esa manera el sector empresario tendrá su oportunidad: podrá reestructurarse con menores costos en materia de personal e intentar nuevas actividades y emprendimientos.

El MODIN —lo hemos dicho reiteradamente— tiene una concepción trascendente del hombre, y reconoce la importancia del trabajo

como mandato inscrito en las normas del derecho natural. Por eso jamás admitirá que el trabajo reciba el tratamiento de simple mercancía sujeta a las normas del mercado. Para nosotros hablar del trabajo es hablar del hombre y sus necesidades, de sus posibilidades de realización personal y familiar, de su inserción dentro de la sociedad. El hombre se hace hombre por el trabajo, y necesita de él como forma de subsistencia y también como mecanismo para desarrollar su tendencia hacia la sociabilidad y su necesidad de solidaridad.

Por los motivos expuestos es que el MODIN reitera su total oposición al proyecto de ley que está considerando esta Honorable Cámara.

Sr. Presidente (Pierri). — Tieno la palabra, la señora diputada por Salta.

Sra. Maidana. — Señor presidente: en nombre del grupo de partidos provinciales voy a expresar nuestra posición sobre el proyecto en debate.

No hay ninguna duda de que la reforma que hoy se nos propone en nada se vincula con el proyecto anterior que nos remitiera el Poder Ejecutivo, en virtud del cual se confería una serie de concesiones a los empresarios y con el que no se resolvía el problema de la falta de empleos.

No creemos que un problema tan acuciante, particularmente para nuestras provincias, pudiera ser resuelto con algunas concesiones, de la misma manera que no se resuelve con el proyecto que tratamos hoy.

Para crear riqueza con emprendimientos agrícolas y ganaderos y con la extracción de minerales, o para desarrollar nuestra industria turística, no se necesitan, a mi entender, normas que amplíen desmesuradamente las facultades de una de las partes en desmedro de la otra.

En nuestra opinión el problema debe canalizarse por otra vía. En una de las visitas que nos hiciera el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, señaló que de la pequeña y mediana empresa se esperaba la apertura del mayor número de fuentes de trabajo, con lo cual estamos de acuerdo sin lugar a dudas, porque es real que la gran empresa, por la convergencia de la producción, su vasta actividad y su capacidad organizativa, puede contar hasta con aparatos electrónicos y de otro orden que suplanten el trabajo del hombre o de la mujer.

Pero no estamos de acuerdo en que se sostenga que el pequeño o mediano empresario que está trabajando con su familia, no amplía el área de

producción porque no se sancionan estas leyes. Particularmente en las provincias las empresas familiares no crecen no por falta de leyes sino por carencia de recursos. No hay créditos accesibles para quien sólo cuenta con un campo, una casa y un tractor; para aquéllos que tienen su casa y poseen maquinaria obsoleta para su fábrica; para quienes se encuentran a cientos de kilómetros de los centros poblados y no pueden cobrar con facilidad su producción; o para aquéllos a los que el transporte les resulta caro o no pueden utilizarlo por el mal estado de las rutas.

A nuestro juicio se trata de trazar políticas crediticias que permitan al interesado contar con fondos suficientes para sus pequeños o medianos emprendimientos. Si bien el señor ministro en aquella oportunidad nos hizo saber que algunos bancos otorgan créditos, bueno es hacer notar que las condiciones que exigen imposibilitan el acceso a los mismos. No es que pretendamos que el tomador de los préstamos sea un insolvente; se trata de que los requisitos sean accesibles al pequeño y mediano empresario, y que el valor del dinero y las condiciones le permitan acceder a dicho recurso a fin de poder iniciarse, reiniciarse o reinsertarse en el mercado en una época tan competitiva como la actual.

En la revisión de las regulaciones laborales debe tenerse presente el conjunto de los sujetos que las originan, es decir, los trabajadores y los empresarios, como así también las específicas características de cada una de las partes involucradas y las del campo en el que les toca actuar.

Es de destacar que el empleador ostenta una posición prevalente en la relación laboral al ser dueño de la fuente de empleo. En este orden de ideas competo al Estado precisamente contrarrestar la referida desigualdad mediante una legislación favorable al trabajador o cuanto menos, concertada de forma tal que pueda considerar su situación. Siendo ello así creemos desacertada la reforma que propicia beneficios concretos para el empleador sin la respectiva contrapartida en favor del asalariado.

En esta línea de pensamiento quiero recordar a Juan Pablo II, quien en una oportunidad sostuvo que la propiedad de los medios de producción, tanto en el campo industrial como en el agrícola, es justa y legítima cuando se emplea para un trabajo útil, pero resulta ilegítima cuando no es valorada o sirve para impedir el trabajo de los demás u obtener ganancias que no son fruto de la expansión global del trabajo y de la riqueza social sino más bien de la explotación ilícita.

Lo advertido no significa que nosotros no valoremos el esfuerzo del Poder Ejecutivo tendiente en algún sentido a buscar los medios para cambiar la problemática del desempleo. Es nuestra intención apoyar en general el proyecto en consideración, dejando constancia de que tenemos disidencias en algunos puntos concretos.

A título de ejemplo deseo señalar que el artículo 1º autoriza a que, por medio de convenios colectivos, se amplíe el período de prueba a seis meses. No compartimos esa norma porque nos parece algo excesivo; entendemos que es suficiente el lapso de tres meses pues nos parece adecuado para que el empleador conozca y se informe de las condiciones personales y profesionales del trabajador. Si estima que reúne las que son de su interés, no hay razón para que todavía después de esos tres meses se considere con derecho a prescindir del trabajador sin tener que abonar indemnización alguna. Esto es lo que hay que decir a los empleadores: incorpórelo a la fábrica, la estancia o la actividad haciéndole notar los beneficios de esa incorporación y su calidad de trabajador permanente, y verá cómo el empleador se siente estimulado.

Por otra parte, no dar al empleado u obrero una expectativa tras tres meses es como frustrarlo en sus apetencias de conseguir un trabajo que será el medio de vida y de subvenir las necesidades propias y de su familia.

Otra discrepancia que también cito a título de ejemplo es una disposición que consigna el texto y que encierra una discriminación en contra de la mujer. So pretexto de facilitarle el acceso al empleo se está privando a la mujer en pleno estado de trabajo, de los beneficios que se confiere al hombre en igualdad de condiciones. No hay argumento que justifique esta discriminación, que además es contraria al orden jurídico habida cuenta de la vigencia de la ley 23.179. Además esto es inconstitucional atento a que la Carta Magna prohíbe toda forma de discriminación.

Estas son las principales objeciones que deseamos formular, sin perjuicio de otras que señalaremos durante la discusión en particular. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Di Tulio. — Señor presidente: quiero plantear con absoluta honestidad intelectual una cuestión cara al sentimiento de la Unión Cívica Radical. Se trata de algo que yo pensaba que sólo producía confusión en el oficialismo, pero lamentablemente debo decir que también existe confusión en las filas del radicalismo con respecto a esta legitimación de la explotación del trabajador argentino.

De ninguna manera tendríamos que asistir a esta flexibilización, o a esta legitimación, como dije anteriormente. Me hubiera gustado que desde el Poder Ejecutivo se girara una propuesta para flexibilizar la riqueza, para hacer participe de ella al trabajador que hoy está siendo oprimido por el patrón toda vez que lo está dejando sin el sustento mínimo indispensable para mantener a su familia.

Me hubiera gustado que ocurriera lo que pasaba en otras épocas, como pudo haber sido en 1983, cuando el radicalismo estaba en el gobierno. El general del pueblo —el general Perón— nunca podría haber promovido un proyecto como éste; y si alguien lo hubiera hecho, no habría faltado a su banca un solo peronista para defender lo que el general entendía que había que defender. Lo cierto es que hoy, algunos equivocada y otras sumisamente, acatan la decisión de un ministro de la robótica, un ministro que no tiene absolutamente nada en el lado izquierdo donde cada uno de nosotros siente latir el corazón y donde cada uno de nosotros interpreta a través de ese sentimiento que no puede existir en el mundo y menos en la Argentina algo que vaya en contra del hombre.

Estamos tratando este proyecto de ley de flexibilización que determinó que el ministro converso —el ministro de Trabajo— haya tenido que venir a festejar esta legitimación que, según dicen, posibilitará al obrero acceder a nuevos puestos de trabajo. ¡Mentira, señor presidente! Como es mentira el hecho de que se diga que esto está acordado con la CGT. ¿Cuál CGT? ¿La de ese hombre que era diputado de la Nación y que se sentaba en estas bancas en el año 1985, reclamando reivindicaciones para los trabajadores? ¿La de ese hombre que hoy conduce la CGT y que antes se oponía a las privatizaciones? Privatizaciones que nada tienen que ver con las que se proponían desde el gobierno de la Unión Cívica Radical. ¿La de este hombre que claudica con su silencio?

Este hombre tendría que haber hecho que la CGT saliese en defensa de los trabajadores que laboran en el puerto de Buenos Aires, o de los mineros de la cuenca carbonífera de Río Turbio, o de los trabajadores municipales de Jujuy. Esta es una CGT silenciosa, convidada de este gobierno, y que todo lo convalida.

De ninguna manera desde las filas de la Unión Cívica Radical tenemos que proponer algo para legitimar esta flexibilización. Hay que flexibilizar la riqueza. Terminemos con la cháchara y no engañemos más a nuestro pueblo. ¿O acaso no saben ustedes que hace muy poco tiempo en el puerto de Buenos Aires hubo un conflicto

tan grave en el que estuvieron a punto de enfrentarse la Prefectura Naval Argentina con los trabajadores portuarios? Trabajadores que sólo reclamaban el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas extranjeras que vinieron a hacerse cargo de las terminales. Esto ocurrió en la terminal 5 concretamente.

Reclamo a los sindicatos que siempre han defendido los derechos del trabajador; no a un sindicato como el actual, que está suprimiendo en la cuenca carbonífera de Río Turbio los derechos de los trabajadores; no a este sindicato de Luz y Fuerza que se ha hecho cargo de la explotación de Yacimientos Carboníferos Fiscales, que está cobrando un subsidio mensual de 1 millón 800 mil dólares para solucionar los problemas de los trabajadores y resulta que están siendo echados a la calle, sindicato que está cobrando 37 dólares de subsidio por tonelada de carbón, cuando debe producir 375 mil toneladas por año.

¡Vayan sacando cuentas, compañeros! ¿A quién le van a decir que con la flexibilización habrá más fuentes de trabajo? Lo único que se hará es legitimar el atropello a los trabajadores.

Se decía del movimiento obrero argentino que el trabajo honra y dignifica al ciudadano, pero en esta oportunidad, compañeros y compañeras diputadas, reconozcamos que en nuestra fila más íntima sabemos que no está pasando esto, que se está atropellando al trabajador.

Sé que hay muchos aquí que tienen ganas de sublevarse ante tanta injusticia. No sé cuáles son los móviles o las creencias que los lleva a pensar que con esta legislación avanzaremos hacia una solución de los problemas de nuestro tiempo. No tengo dudas de que hay hombres luchadores en este recinto, que han expuesto su vida en otras épocas y que hoy, ciego que confundidos, van a votar favorablemente esta flexibilización laboral, este atropello a la gente trabajadora de la Argentina.

También quiero decir a los compañeros que deben tener presente que hace poco nuestros trabajadores posqueros hacían reclamos sobre la manera en que se otorgaban las libretas de embarque. Se decía que habría trabajo para nuestra gente. ¡Qué mentiral! Si están trayendo gente de China, de Taiwan y de otras partes del mundo, que trabaja por un puñado de arroz mientras 50 mil trabajadores argentinos vinculados con la pesca quedan afuera.

Esta no es una cuestión que se me la ocurrió. Ha sido planteada no sólo por los trabajadores, sino también por la Prefectura y la

Armada argentinas en el seno de la comisión de la que soy vicepresidente.

¿A dónde vamos a ir con este proyecto de flexibilización?

A los radicales quiero preguntar con absoluta honestidad intelectual si no podemos ofrecer otra propuesta alternativa, para frenar este atropello que desde el Ejecutivo se pretende hacer contra el trabajador argentino.

Para concluir quiero recordar la situación del país al producirse la revolución del 4 de junio de 1943, cuando el general Perón reivindicó a su pueblo, a su gente sin ningún tipo de distinción, quien seguramente ha sido incomprendido por muchos integrantes de otras filas políticas, como pudo haber sido la mía, por mi propio padre. Pero en este caso tengo autoridad moral para hablar sobre este tema porque siempre he reivindicado la obra emancipadora de Perón en lo que hace a la dignificación del trabajador argentino.

¿Dónde van a estar los derechos del trabajador a una retribución justa o a la capacitación, que el ministro robot, el sin corazón, ni siquiera permite, saliendo con este verso de que lo que sucede en la Argentina está ocurriendo en todo el mundo? Perón fue reivindicado muchas veces en la OIT por las leyes laborales que regían en la Argentina cuando en otras naciones había caos total, cuando los países que habían participado en la guerra no tenían qué comer. Nunca en la Argentina se ha utilizado un argumento así para justificar la inoperancia de un gobierno entregador y claudicante como lo hace hoy el ministro Cavallo.

Quisiera preguntar a los compañeros diputados si el derecho a la condición digna de trabajo, a la representación gremial, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la familia, al mejoramiento económico, son agua de borraja, o piensan que esto es cháchara débil del diputado Di Tulio; yo sería capaz de dar mi vida si es necesario pues tengo tras de mí hijos grandes, que tienen hijos y que no tienen trabajo y que no pueden honrar ni dignificar a sus familias como en otros tiempos se ha hecho en esta tierra argentina.

Por esto quiero dejar constancia y reiterar mi absoluta honestidad intelectual. No voy a votar ni a favor del proyecto del Poder Ejecutivo ni de otro proyecto o propuesta que se haga. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por San Luis.

Sra. Salino. — Señor presidente: quiero rescatar que en el marco en que surgió esta ley el 25 de julio de este año se firmó el acuerdo entre la CGT, en representación de los trabajadores, la UIA, en representación del sector empresarial, y el gobierno. En ese marco de acuerdo surge este proyecto de ley con nuevas modalidades contractuales. El problema de los hombres y mujeres de nuestro país es el del desempleo, y es responsabilidad de todos buscar la mejor forma para su solución.

Nosotros como legisladores no podemos rehuir ni escapar de la obligación que tenemos, de dar una respuesta a quienes realmente no tienen ni encuentran fuentes de trabajo.

Quiero referirme específicamente y rescatar en esta norma la modalidad especial de fomento del empleo. Dentro de este marco deseo señalar a la modalidad promovida para la mujer. De los 33 millones de habitantes que tiene nuestro país, el 48,97 por ciento son hombres y el 51,03 mujeres. La población femenina económicamente activa, según la encuesta permanente de hogares, es el 38 por ciento, es decir que de cada 100 mujeres 38 trabajan. Las últimas encuestas indican que la oferta de mano de obra femenina va en aumento y creemos que, entre otras cosas, esto se debe al crecimiento de la actividad económica, a la necesidad que hay en los hogares de contar con un segundo sueldo, con otro salario para ayudar al jefe del hogar, y al hecho de que hay muchas mujeres que en estos momentos son jefas de hogares. Esto ha generado de hecho que exista un sector informal de trabajo femenino, que se da con trabajo en negro, en el cuentapropismo, en el servicio doméstico, en el trabajo domiciliario y en el rural.

De hecho esta situación ha generado grandes problemas para las mujeres, porque no tienen una formación acabada sobre las nuevas modalidades y formas de acceso al empleo. Algunas mujeres no conocen cuáles son sus derechos laborales y además hay una falta de conocimiento de los programas oficiales de empleo, por lo cual se ha generado una flexibilización laboral que se está dando en los hechos.

Creemos que la situación debe ser revertida y para ello se necesitan medidas positivas. Entre esas medidas creemos que hay que modificar las pautas culturales de nuestra sociedad, que tradicionalmente establece que determinadas tareas están a cargo de mujeres.

Hay falta de jardines maternos y la atención de los ancianos y enfermos generalmente está a cargo de mujeres. Debemos también lograr un nuevo conocimiento de la mujer sobre

la igualdad de oportunidades que existe para hombres y mujeres. Hay que sensibilizar a las áreas responsables de los organismos públicos para que en sus programas incluyan medidas favorables a la mujer. Deben generarse programas de recalificación y de formación laboral y profesional para la mujer y, entre otras cosas, deben promoverse modalidades de contratación como esta que nos ocupa, que induzcan al empleador a privilegiar a las mujeres para cubrir puestos de trabajo.

En países como España estas medidas se han llevado adelante con buenos resultados. Entonces demos que es muy importante abrir a la mujer la posibilidad del campo laboral, sobre todo aquellas que disponen de menores recursos o están a cargo de sus hogares. Es decir que tratamos de abrir el campo laboral a la mujer, pero no hablamos de aquellas que ya han logrado una ocupación laboral. Si logramos establecer esta nueva modalidad de contratación, con ello favorecemos el empleo femenino. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: hace algunos momentos el señor diputado Estévez Boero, integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo, fijó la posición del bloque al que pertenecemos, que comparto absolutamente. No obstante he solicitado hacer uso de la palabra para referirme a algunas cuestiones vinculadas con un tema que es complejo y difícil, y además tiene un trasfondo político e ideológico. Precisamente deseo referirme a este trasfondo, a fin de complementar la exposición realizada por el señor diputado que he citado.

El proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno nacional y que han hecho suyo las comisiones de Legislación del Trabajo y de Previsión y Seguridad Social, se halla dentro de un marco referencial, un contexto ideológico que está dado por la llamada revolución conservadora y la teoría de la flexibilidad.

Esta política de flexibilidad, que en síntesis consiste en destruir en todo lo posible el capital, anulando a la vez los mecanismos legales que de una u otra manera protegen al trabajador, nace en Europa hace más de veinte años al compás de los llamados "círculos virtuosos del capitalismo" que otorgaron ciertas características positivas al sistema fordista de producción y posibilitaron que grandes sectores de la población accedieran a los beneficios del progreso de la era industrial. A mayor producción, menor costo del producto, mayor consumo, mayor ofer-

ta de empleo, mejores salarios, etcétera: este círculo virtuoso del capitalismo, cuya duración parecía indefinida, por diversas razones que tuvieron como detonante la crisis del petróleo, se rompe a principios de la década del 70 y entra en crisis.

Entonces surgen conceptos tales como la desregulación, la flexibilidad y la recomposición de las ganancias del capital, y todo ello se pretende hacer a costa del sector del trabajo. Esta teoría —como muchas otras— llega a la Argentina cuando en los países en que estuvo de moda comenzó a ser abandonada. En definitiva, el sector del capital comienza a presionar a los gobiernos del mundo para obtener dos cosas: empleos cada vez más cortos y despidos cada vez más baratos, si es posible gratuitos.

A partir de entonces el Estado, que había adoptado una actitud de defensa de los derechos de los trabajadores, pasa a defender más o menos desembozadamente al sector empresarial y de ese modo el derecho del trabajo pierde su carácter protector del sector más débil, que es su razón de ser.

En un trabajo que escribí cuando el gobierno envió su primer proyecto sobre flexibilización laboral señalé algunas cuestiones que esta noche quiero reiterar porque continúan teniendo vigencia. Por ejemplo, digo que la revolución conservadora —previa imposición de sus teorías por vía de leyes o decretos de emergencia— efectuó un trabajo propagandístico muy hábil, que surtió efectos porque logró captar a buena parte de la sociedad y también a una porción importante de la dirigencia sindical argentina.

No podemos olvidar que esa ideología surgió en Europa en un marco distinto al que en este momento existe en nuestro país. Para demostrarlo daré algunos ejemplos que son por demás elocuentes. Cuando en Europa se habla de desregular se parte de una base salarial de 1.500 a 2.000 dólares promedio; en cambio en la Argentina, cuando mucho, podemos hablar de 400 pesos. En Europa existe lo que se conoce como estabilidad real de los trabajadores, mediante la cual nadie puede ser despedido por decisión unilateral sin previo proceso administrativo o judicial. Por el contrario, en nuestro país esta medida se puede llevar a cabo mediante el pago de una indemnización, lo que permite que sin que medie causa alguna se pueda terminar con el contrato laboral. En Europa un acto de esta naturaleza sería ilícito; sin embargo, en nuestro país la ilicitud consiste en el incumplimiento del deber de brindar trabajo, pero puede ser salvada mediante el pago de una indemnización, que se deteriora en la misma medida en que lo

hacen los salarios, que son los que se toman como referencia para hacer efectivo el pago de aquélla.

En Europa la participación promedio de los trabajadores en el producto bruto es del 65 por ciento mientras que en la Argentina dicha participación asciende al 35 por ciento.

En los principales países del mundo existe un eficaz sistema de reciclaje de la mano de obra afectada por las innovaciones tecnológicas sin que exista pulsividad; en cambio, en nuestro país hay pulsividad de mano de obra pero sin introducción de técnicas de avanzada.

Veamos algunos elementos que caracterizan estas nuevas modalidades de la relación laboral. La realidad del trabajador en Argentina es la precarización y la desprotección, que han alcanzado un nivel nunca conocido en la historia argentina. Estas nuevas relaciones se basan en varios presupuestos que voy a tratar de destruir. El primero es el de que un menor costo laboral aumenta la oferta de empleo. En este sentido ningún teórico del conservadurismo ha podido demostrar jamás la verdad de este aserto. Nadie contrata a un trabajador porque resulta más barato, y esta noche, por los discursos que hemos escuchado, tampoco nadie nos ha demostrado que porque exista una mayor precarización en la contratación del trabajador va a aumentar el empleo en nuestro país.

Recuerdo que hace pocos días, cuando concurrió al seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social junto a otros integrantes del equipo económico, se dijo que se proponía reducir las contribuciones empresariales —medida que en nuestra opinión va a desfinanciar el sistema previsional— porque con esa medida se contribuía a aumentar el empleo en la Argentina. Así, cuando le pregunté al señor ministro que me demostrara en qué medida la reducción de los aportes patronales contribuía a aumentar el empleo, me contestó que era muy difícil contar con esos datos. Lo cierto es que no los tiene porque ese tipo de disposiciones no ha influido en el aumento del empleo ni en la reducción de los costos empresariales.

Ahora nos vienen con este nuevo sofisma de que precarizando aún más el empleo va a aumentar el número de puestos de trabajo. ¿Dónde están las cifras, los argumentos y los ejemplos de otros países del mundo para hacer tal afirmación? En mi opinión éste es un argumento temerario pues no se puede demostrar lo indemostrable. Esta medida sólo va a contribuir a mejorar la situación de los empresarios y no la

de los trabajadores o la de quienes carecen de empleo.

Sr. Albamonte. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Polino. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte. — Señor presidente: he seguido con mucha atención este debate y, sobre todo, los conceptos vertidos por el señor diputado que tan gentilmente me concedió esta interrupción, y al respecto me pregunto si está bien utilizar el verbo precarizar cuando en la actualidad un hombre de 40 o 45 que tiene la desgracia de que se funda la empresa en la cual trabaja, prácticamente es condenado a ser un paria.

Casi todos hemos recibido a hombres de entre 40 y 50 años, que vienen a decirnos que son mantenidos por sus hijos o por su mujer. ¿Realmente estamos con tanta falta de imaginación como para negarnos a un cambio que tienda a solucionar esta precariedad que hoy estamos viviendo?

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: el diputado que me precedió en el uso de la palabra se ha referido a los trabajadores mayores de 40 años, que han sido contemplados en un artículo de este proyecto que a mi juicio agravia a la mujer argentina, toda vez que indica: "Como medida de fomento del empleo se autoriza la contratación de trabajadores mayores de 40 años, de discapacitados, de mujeres y de ex combatientes de Malvinas...". Es decir que aquí se está equiparando a los hombres mayores de 40 años con las mujeres, los discapacitados y con los ex combatientes de Malvinas. Este artículo luego señala: "Los empleadores que celebren este tipo de contratos serán eximidos del 50 por ciento (50 %) de las contribuciones patronales al sistema de seguridad social, excepto obras sociales". El hecho de que se exima del pago del 50 por ciento de las contribuciones patronales a aquellos empleadores que contraten mujeres o personas mayores de 40 años contribuye a la precarización. Esto está acentuando la desigualdad entre las mujeres y los hombres en nuestro país. Además quiero señalar al señor diputado que el costo de la mano de obra...

Sr. Presidente (Pierri). — Diríjase a la Presidencia, señor diputado.

Sr. Polino. — Señor presidente: además, el costo real de la mano de obra en el producto terminado oscila en un 8 por ciento en la Argentina. Se trata de una participación muy baja que tienen los trabajadores en el costo final de los productos. Ahora se pretende ahorrar mediante un recorte de este 8 por ciento.

Sra. Bullrich. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Polino. — No tengo inconveniente en conceder todas las interrupciones que me soliciten, siempre y cuando no se descuente ese tiempo del que dispongo para mi exposición.

Sr. Presidente (Pierri). — Señor diputado: no es posible prolongar la hora a la que usted debe finalizar su exposición.

Sr. Polino. — Entonces, lamentablemente, no puedo conceder ninguna interrupción.

Con respecto a la competitividad la Corte Suprema de Justicia de Japón estableció que las empresas deben tener como mínimo un 75 por ciento de sus trabajadores con carácter estable y con garantías en lo que atañe a sus derechos a la seguridad social, a la salud, a la vivienda y a la jubilación.

El segundo argumento que se utiliza es la presunta rigidez de la legislación social argentina. Esta es una de las muletillas predilectas del conservadorismo local. Se argumenta que el exagerado proteccionismo de la ley en favor del trabajador actúa como un bumerán, ya que lo perjudica mediante el desaliento a la creación de nuevas fuentes de trabajo. Por extensión de este planteo maquiavélico, se sostiene que el trabajador que lucha por defender sus derechos y los de sus compañeros para convertirlos en una especie de enemigo de la propia clase trabajadora, como una consecuencia perversa de su accionar.

En tercer lugar, se dice que la desregulación produce un efecto beneficioso en la protección del empleo. Se argumenta que la flexibilización laboral genera una mayor inversión, que permite crear nuevos puestos de trabajo. Esto nunca ha sido demostrado ni por la experiencia local ni por la extranjera. Por el contrario, parece producir efectos opuestos.

En nuestro país podemos tomar el ejemplo de la industria de la construcción, que presenta un régimen superflexible; sin embargo, está padeciendo una de las crisis más profundas. Como contraposición se puede citar la actividad bancaria, que se desarrolló enormemente en la época de la "patria financiera" y que tenía un sistema que era muy protector de los trabajadores. Con estos dos ejemplos demostramos la

falacia de este argumento. La industria más desprotegida, como la de la construcción, padece la crisis más profunda.

El cuarto argumento consiste en que la flexibilización aumenta la competitividad de las industrias. Aquí cabe destacar que el proceso indetenible de la globalización de la economía ha convertido al mundo en un escenario único y gigantesco en el que las sucursales nacionales de Toyota, Johnson y Johnson, Coca Cola, etcétera, han hecho desaparecer las fronteras y las identidades nacionales.

Si la necesidad de competir es cierta, es falso que pueda lograrse aumentando más la precariedad del modelo de trabajo, tanto en la Argentina como en cualquier lugar del mundo.

En un reciente editorial de la revista británica conservadora "The Economist" se analizan las consecuencias de la flexibilidad laboral en la competitividad de la economía laboral. Dice así: "La conclusión es que en aquellos países en los que se flexibilizó el mercado laboral, pasando a tener un segmento importante de la clase trabajadora bajo contrataciones precarias y de corta duración, bajó el nivel e intensidad de la capacitación y entrenamiento de los trabajadores, precisamente en estos tiempos en que reinan las complejas y sofisticadas técnicas. Los empresarios que piensan que no van a mantener a sus obreros mucho tiempo, no invierten en su capacitación.

"Luego de cierto tiempo, la economía de estos países comienza a perder competitividad frente a la de aquellos otros países donde los trabajadores permanecen mucho tiempo en la misma empresa. Como ejemplo, los Estados Unidos y la misma Inglaterra, donde los trabajadores en un 60 por ciento tienen menos de 5 años de antigüedad y sólo un 10 por ciento de los jóvenes recibe capacitación de sus empleadores. En cambio, en Japón o Alemania, los trabajadores permanecen en la misma empresa un promedio de casi 11 años, y el 70 por ciento de los jóvenes son capacitados por sus patrones."

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Horacio Daniel Usandizaga.

Sr. Polino. — El tratadista nacional Gerardo Von Potohsky, en un artículo publicado por el diario "Clarín", señala: "La precarización para reducir costos puede servir como expediente de emergencia pero abre las puertas a un facilismo competitivo basado en una mano de obra barata y no calificada. Además quita incentivos

al empresario para lograr una mayor eficiencia productiva con el fin de compensar costos laborales muy elevados. Una política de recursos humanos acertada debe tender a una mano de obra estable, calificada y participativa dentro de la empresa. Es en el marco de la seguridad del empleo donde es factible promover la polivalencia del trabajador así como su cooperación en los cambios organizativos y tecnológicos de la empresa, que son los respectivos factores de una mayor productividad laboral y del capital."

Concluye diciendo este estudioso: "Una reforma competitiva de la legislación del empleo, debería preservar en cuanto se pueda la continuidad en el empleo. Tal es la tendencia que se acentúa en los países europeos, donde los gobiernos vuelven a incentivar la estabilidad laboral."

Estamos importando productos muchas veces de segunda mano que han caído en desuso en otros países del mundo como si fuéramos un pueblo de segunda categoría. Hoy importamos instituciones del derecho laboral que ya fueron experimentadas en otros lugares del mundo y que están siendo abandonadas porque no dieron los resultados esperados en esos países.

Cuando en este Parlamento se dictó la Ley de Empleo también se pensó que se iban a generar puestos de trabajo, y hoy podemos decir que esa norma no cumplió con las nobles finalidades que tuvieron los legisladores. Este proyecto también va a fracasar, pero no porque así lo queramos los diputados de la oposición; desearíamos equivocarnos; ojalá que estas normas puedan contribuir a reducir los altos índices de desocupación que existen en la Argentina. Pero, ¿saben por qué va a fracasar esta iniciativa? Porque los empleos no se generan con leyes ni con normas jurídicas si éstas no están acompañadas de una política económica que promueva la reactivación industrial. Si no promovemos una política arancelaria que ponga restricciones al libre ingreso de productos que se fabrican en otros lugares del mundo, no lograremos dicho objetivo. De esta manera estamos contribuyendo a generar puestos de trabajo a miles de kilómetros de nuestras fronteras, con lo cual también estamos provocando el cierre de persianas de muchas industrias argentinas. Cuando se cierra una fuente de trabajo, lamentablemente tienen que pasar muchos años para que se abra otra en sustitución de la que había quebrado o cerrado.

Si el gobierno continúa ignorando las economías extrapampeanas o regionales no se podrán generar puestos de trabajo. Ni siquiera podemos

ponderar si las políticas son más o menos buenas o malas; directamente no existe una política por parte del gobierno nacional que impulse el desarrollo de dichas economías regionales. La inmensa mayoría de legisladores del interior del país que integran esta Cámara sabe perfectamente bien cómo languidecen esas zonas, y que en muchas de esas regiones se está al borde del colapso; el gobierno sigue sin tomar medidas ante esta angustiosa situación.

De modo que no será con leyes de este tipo que se promoverá la reactivación industrial y económica de la Argentina. Debemos decidirnos a poner punto final a una política económica que está demostrando hasta el hartazgo que es inviable; sólo se ha agotado en la estabilización monetaria, que consiste en que un peso aún hoy continúe valiendo un dólar, pero es absolutamente incapaz para promover el desarrollo del país.

Por las razones expuestas vamos a votar en contra de esta iniciativa. Consideramos que tiene un sustento ideológico perverso que ya ha demostrado su fracaso en el mundo. ¿Por qué no intentamos reducir los costos de los bienes o servicios a partir de la disminución de los grandes gastos que se destinan a publicidad, viajes de gerentes y funcionarios de alto nivel de grandes empresas e importantes honorarios que perciben dichos funcionarios? ¿Por qué no tratamos de modificar el sistema impositivo argentino, que está basado en la inequidad y en que proporcionalmente pagan más los que menos tienen y viceversa? ¿Por qué no nos atrevemos a tomar medidas de fondo que modifiquen la estructura vinculada con el estancamiento, el atraso y la dependencia exterior? Mientras no se adopten estas medidas, aunque se aprueben proyectos de ley como los que se pretende sancionar esta noche, no se obtendrán los resultados esperados.

No descarto que existan legisladores bien intencionados que crean honradamente que están haciendo una contribución en favor de la clase que representan y del país al apoyar esta iniciativa. Pero la realidad va a ser más tozuda que esas buenas intenciones, y más temprano que tarde, lamentablemente, el tiempo nos dará la razón.

Advierto en su mirada y sus gestos, señor presidente, que mi tiempo está por agotarse, de manera que para ser respetuoso de las normas que nosotros mismos nos hemos impuesto concluiré expresando que votaremos en contra del proyecto en consideración por tratarse de una norma jurídica que, de convertirse en ley, agre-

vará las condiciones laborales de la clase trabajadora argentina. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Usandizaga). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Sebastiani. — Señor presidente: como miembro de la Comisión de Legislación del Trabajo he suscrito el dictamen, y quiero hacer una consideración al respecto porque ningún diputado se ha referido a los elementos que a mi juicio motivan que este problema del desempleo deba ser analizado bajo el contexto de lo que ha sucedido en la Argentina en los últimos años. Dentro de once días la Argentina entra en sociedad con la novena potencia industrial del mundo: la hermana República del Brasil. No se trata de un dato menor sino de algo que en los próximos meses va a generar situaciones muy complejas en varios ramos, sobre todo en el sector industrial. Hace 35 años que soy industrial y algunos que soy dirigente empresario; en ese sentido deseo aclarar que la CGT y el gobierno no firmaron un acuerdo con la Unión Industrial Argentina sino con ocho entidades representantes de los sectores agropecuario, de servicios, de la construcción, el comercio y la industria.

Como muy bien lo expresó el señor vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, diputado Alcides Humberto López, el desempleo no es un fenómeno que se combate o corrige con leyes. Por eso es necesario tener en cuenta el contexto en el cual se está desenvolviendo este flagelo en el mundo.

Como lo señalé durante el debate en comisión, el único país que ha disminuido su índice de desempleo es Estados Unidos, que carece de la institución de la indemnización por despido. Como legislador —y no es mi intención formular defensa corporativa alguna— esto nos obliga a pensar que de aquí a tres meses tendremos que volver a discutir el problema del desempleo en la Argentina, porque coincide con quienes han expresado que éste seguirá creciendo.

Hay datos que en alguna medida nos tendrían que poner contentos: se está invirtiendo algo y se lo está haciendo en maquinaria nueva, en informática y en lo que también reclamó algún diputado preopinante: en formación profesional, que vale tanto para los obreros como para los empleados, vale para los dirigentes sindicales y mucho más quizá en este momento para los empresarios, porque en el conjunto es donde nos vamos a poder poner de acuerdo. Espero que así sea. Tendremos que actuar no sólo con leyes laborales sino con una política industrial que

permita el desenvolvimiento —sobre todo como se dijo aquí— de las pequeñas y medianas empresas, que son las que están sufriendo algunos problemas conexos con el modelo actual.

Entonces, en marzo o abril del año que viene tendremos la necesidad de discutir ya no con simples argumentos de tipo político, sino con cuestiones muy concretas: flexibilización laboral, leyes laborales nuevas y una política industrial que permita bajar este índice del 15 o 20 por ciento de desocupación en el sector industrial, que es el que está expulsando una gran cantidad de mano de obra por la renovación a que se está viendo sometido.

En este sentido en mayo de este año presentó un proyecto de flexibilización laboral para pequeñas empresas, como lo tienen Italia, España y Alemania, observando que esta expulsión de mano de obra que se da en el sector, y que llega a índices del 15 y 20 por ciento, constituye no sólo un problema político sino social, y muy grave.

Sr. Presidente (Usandizaga).— Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Solanas.— Señor presidente: deseo agregar algunas consideraciones a las formuladas por los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra.

Es cierto que estamos intentando dar respuesta a una suerte de mancha negra que crece: la desocupación. Es cierto también que en este recinto no es la primera vez que se tratan leyes tendientes a enfrentar este problema. Lo propio ocurrió con la ley de empleo y con la ley de accidentes de trabajo, pero los índices de desocupación siguieron aumentando en la Argentina.

La desocupación que existe en nuestro país es la resultante directa de un modelo socioeconómico neoliberal que ha venido desprestigiando el mercado argentino, así como un cúmulo de derechos sociales que constituyeron a lo largo de estas décadas un orgullo para todos los argentinos.

En realidad esta tercera iniciativa legal cierra el ciclo iniciado por las otras que nos anticiparon la flexibilización laboral. La cadena de riesgos, en lugar de ser asumida por el empleador, en este caso pesa sobre los trabajadores.

En síntesis nos encontramos ante una precarización —como se ha dicho— de los derechos del trabajador. Además, como toda esta política económica también ha venido aumentando la tasa de desempleo, nos hallamos frente a una tercera vuelta de tuerca, frente a una auténtica ley de desempleo nacional.

En los últimos años no sólo han aumentado considerablemente tanto el producto bruto interno como la recaudación impositiva —circunstancia que no se ha visto reflejada en un beneficio directo del sector asalariado ni en la estabilidad del empleo, que es la primera condición que cualquier trabajador o familia necesita para programar su vida y proyectarse— sino que también hemos venido constatando la pérdida de ese conjunto de derechos sociales.

A nadie escapa que el trabajo es el principal de los derechos. El ciudadano que no tiene trabajo es un marginado, es un paria que ha perdido de hecho el conjunto de los llamados derechos ciudadanos. En esto ha convertido a la Argentina el modelo neoliberal: la pérdida sistemática de derechos en una política de *apartheid* social, de condena al desempleo de enormes contingentes de argentinos.

La víctima de toda esta política es esencialmente la juventud. Las estadísticas indican que casi el 70 por ciento de los desocupados son jóvenes de menos de 25 años.

Nuestra visión es que la disminución de las oportunidades de trabajo se debe a las siguientes causas. Primero: la apertura indiscriminada de la economía, que originó la desaparición de una importante cantidad de pequeñas y medianas empresas ligadas a sectores que son fuente de trabajo, como por ejemplo la industria textil. Esta apertura implicó la entrada promocionada de maquinarias favorecida con la eliminación de aranceles de importación.

Esto ha tenido dos efectos. Por un lado, un fuerte carácter destructor de la industria de bienes de capital de orden local, y por otro, el abaratamiento del factor capital respecto del factor trabajo, sustituyéndose a este último por el primero en el proceso de producción.

Segundo: esta reconversión económica ha provocado fundamentalmente un cambio de las relaciones de propiedad que llevó a una fuerte concentración de ella y no a un cambio —salvo algún caso puntual— que implicara la modernización de los procesos productivos.

Recordemos que hace pocas semanas el Banco Mundial sostuvo que el modelo argentino era de extrema polarización, que había multiplicado la riqueza y que el poder adquisitivo de los sectores populares equivalía a la mitad de lo que se ganaba en el año 80.

Esta concentración de las formas de propiedad disminuyó la importancia que ocupaban las pymes en la economía como principal fuente generadora de empleo.

Tercero: la desaparición de los marcos y organismos reguladores en las economías regionales y el papel del Estado como actor en la defensa de esta unidad nacional, donde intervenía como nivelador y moderador de las relaciones interregionales de la Nación, llevó a un severo deterioro de las economías regionales, produciendo un fuerte incremento de la desocupación en las provincias pobres con un alto impacto en la tasa de desocupación nacional.

Cuarto: sostenemos, por lo tanto, la necesidad de introducir un verdadero proceso de innovación tecnológica funcional en nuestra economía, que tienda a reconvertirla progresivamente.

Señalemos que sin una fuerte capacitación laboral, como está sucediendo en las principales economías del Primer Mundo —como ejemplo tomemos a Japón—, y sin una fuerte inversión en conocimiento intensivo, en educación y en investigación científico-técnica, lejos de prepararse para entrar competitivamente en el tercer milenio, la Argentina estará desaprovechando todas las oportunidades.

Este modelo también está generando una pérdida de autonomía nacional muy grande y está desaprovechando el talento nacional. Ahí está esta política de desprecio y disminución de la capacidad científico-técnica argentina, con los ejemplos del Conicet y ahora el de la mayor concentración científico-técnica de América latina, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Por estas razones consideramos que, para terminar con el desempleo, hay que abandonar al causante de él, que es el modelo neoliberal, y marchar hacia políticas que tiendan a un Estado regulador que al menos controle áreas estratégicas de la economía.

El costo argentino es alto pero no lo es, como decía recién el señor diputado Polino, por lo que ocupa el costo laboral en el producto acabado. También son caros los servicios; pagamos los pulsos telefónicos, las comunicaciones, los peajes y los combustibles más caros desde Alaska a Tierra del Fuego.

El costo financiero de este país es altísimo. Recordemos que el descubierto de las empresas en los bancos les está costando el 4 por ciento mensual, cuando todos sabemos que la tasa LIBOR no pasa del 7 o del 7,5 por ciento anual. El costo argentino es alto, y como el modelo económico adoptado no lo puede reducir ni por el costo financiero ni por el costo de servicios, se quiere hacer pagar ese déficit al sector más desprotegido, que es el laboral.

El señor diputado Di-Tulio recordó muy bien lo que significó para la Argentina esa avanzada grande de derechos sociales, esa verdadera defensa de los más desprotegidos y del sector asalariado. Todo eso lo hemos venido perdiendo con una política salvaje que, en lugar de colocar al hombre y al trabajador como eje y columna vertebral, de forma tal que las políticas se desarrollen en torno de él, hace las cosas al revés. Aquí el carro se ha puesto delante de los caballos.

Para terminar mi exposición quiero citar a Héctor Pedro Recalde, conocido profesor de derecho del trabajo de la Universidad de Buenos Aires, quien nos dice "...esa precarización de las relaciones laborales en nuestro país va a contrapelo de las necesidades reales del aparato productivo y de la ciencia moderna. Sólo producirán inestabilidad y falta de capacitación. No crearán nuevos puestos de trabajo sino que lograrán la rotación en los lugares ya existentes. Se generalizarán los abusos de derechos incompatibles con la evolución de la dignidad humana y lograrán romper el tejido de solidaridad social precisamente en el lugar donde encuentra su génesis, que es en el seno de la empresa. Parece imprescindible advertir que la pérdida de esos vínculos de solidaridad implica una lesión para toda la sociedad, que perderá así la base de sustento que desplaza el interés individual por el de la comunidad. Por el contrario, reivindica la política del 'sálvese quien pueda'."

Por todas estas razones vamos a votar en contra de este nuevo proyecto de flexibilización laboral, que no es otra cosa que seguir aumentando el desempleo y la injusticia.

Sr. Presidente (Usandizaga). — Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Zuccardi. — Señor presidente: haré uso de la palabra al solo efecto de agregar a la consideración de esta iniciativa algunos argumentos que hasta el momento no he escuchado.

Hoy nos enfrentamos al debate de este proyecto de ley, en una situación en que en el mercado laboral ya son precarias las condiciones de trabajo. En realidad es el bien escaso lo que hizo precarias esas condiciones. Hoy muchos trabajadores y trabajadoras se ven obligados a aceptar formas y modalidades todavía no legisladas; se trata de modalidades informales de contratación. Esa es la única manera para poder subsistir.

Considero que mediante este marco regulatorio sólo se logrará legitimar estas condiciones

injustas que han hecho precario el empleo en la Argentina en un momento en que no existen medidas activas en el orden económico para propender a la generación de nuevos puestos de trabajo. Enfrentamos modalidades de promoción en situaciones como las actuales, en que un joven sabe que para conseguir un puesto de trabajo seguramente debe desplazar a su propio padre, porque de lo contrario no encontrará espacio laboral.

A la vez que introducimos estas modalidades estamos conculcando derechos inalienables de los trabajadores, como lo son la capacitación y la información, que ni siquiera han sido enunciadas. El derecho a la información debe estar presente en toda legislación moderna del trabajo. No podemos pedir sólo sacrificios si no hacemos copartícipes y responsables a quienes estamos sugiriendo como víctimas de una situación de ajuste.

No quiero abundar en argumentos que tienen que ver con lo inapropiado del concepto de la disminución del costo laboral argentino, para lo cual se ajusta el cinturón por donde es más fácil: el bolsillo de los trabajadores. Deseo recordar algunas palabras que el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, en ocasión de una reunión que oportunamente mantuviera con el bloque Justicialista, expresó a raíz de los planteos que yo formulé con respecto al primer proyecto de flexibilización laboral. El señor ministro dijo —exhorto a mis compañeros a que lo recuerden— que de ninguna manera ese proyecto o medidas de este tipo iban a generar nuevos puestos de trabajo o favorecer la generación de trabajo en la Argentina.

Observo que en las exposiciones anteriores ha sido totalmente soslayado un capítulo de la iniciativa —quizá no he escuchado hablar al respecto—, que a mi juicio es muy complicado. Existe un proceso evidente de concentración económica en la Argentina y sólo los “grandes” están resultando favorecidos a raíz de este fenómeno de crecimiento económico que se anuncia en los indicadores macroeconómicos y en los organismos internacionales donde nuestro ministro Cavallo suele “vender” lo próspero de la situación económica argentina.

Internamente todos sabemos que hay un proceso de concentración económica en pocas manos; un puñado de gente cada vez más rica y más cantidad de gente cada día más pobre. Si estas modalidades transitorias de fomento del empleo no son obligatoriamente adjudicadas a aquellos que generen nuevos puestos de trabajo, ¿qué es lo que se está intentando con

estas modalidades? ¿Con ello sólo se busca blanquear la situación de los “grandes”, que pueden hacer aun más precaria su planta laboral, o se está tratando de facilitar todavía más las condiciones de trabajo inestables y fuera de toda previsión?

Si este cuerpo mayoritariamente está decidido a aprobar el dictamen de comisión, al menos debería incorporar en él una normativa que establezca que todas las modalidades previstas sólo serán posibles para las pequeñas y medianas empresas de la Argentina en el caso en que generen nuevos puestos de trabajo. Esto deberá ser comunicado fehacientemente a los organismos de trabajo tanto nacionales como provinciales, u otros que se determinen, porque de lo contrario no va a favorecer la creación de un solo puesto de trabajo.

Es probable que una modalidad transitoria de esta naturaleza se justifique si un pequeño o mediano empresario obtiene algún beneficio y logra crear diez nuevos puestos de trabajo. Si ello no es así sólo conseguirá dar precariedad a las condiciones de la planta que hoy tiene.

No he de abundar en detalles acerca de que estas políticas han fracasado en otros lugares del mundo ni exagerar sobre temas referidos a cómo se va a concentrar el trabajo peor remunerado en manos femeninas o en hombres mayores de 40 años que desgraciadamente van quedando fuera del mercado laboral.

Seguramente tras la intención de favorecer el acceso a puestos de trabajo de sectores que hoy son discriminados estamos legitimando que los trabajos menos remunerados y más inestables se concentren en esos sectores, con lo cual el remedio será peor que la enfermedad.

Quiero hacer expreso el pedido que he formulado en otras oportunidades, especialmente en ocasión en que el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social se hiciera presente en el bloque Justicialista para referirse al primer proyecto que el Poder Ejecutivo enviara al Parlamento. Aclaro que no lo pude hacer en el seno de la Comisión de Previsión y Seguridad Social —que debía tratar ese proyecto— porque no fui convocada a la respectiva reunión.

Exhorto a quienes vayan a votar afirmativamente el proyecto en consideración a que si piensan que de este modo se va a paliar la falta de trabajo, hagan expresa su voluntad incorporando un artículo que determine que estas modalidades transitorias sólo están dirigidas a la pequeña y mediana empresa, siempre y cuando generen nuevos puestos de trabajo.

Advierto que no comparto el espíritu del proyecto que se está considerando; no obstante entiendo que una medida de esta naturaleza atemperaría el daño que va a producir esta legalización con la situación de inestabilidad del trabajo en la Argentina.

Sr. Presidente (Usandizaga). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Ibarreche. — Señor presidente: a esta altura del debate está todo dicho. He escuchado argumentos profundos y discursos apasionados; se ha hecho referencia a la legislación comparada, a análisis históricos del derecho del trabajo y se han formulado enjuiciamientos a las políticas económicas que han ponderado que a través de esta iniciativa va a mejorar la competitividad y aumentar el empleo.

Desde mi punto de vista —y lo digo respetuosamente— entiendo que este último concepto puede parecer exagerado porque este proyecto de ley no va a resolver el problema del empleo.

La creación de nuevos empleos se logra a través de la búsqueda de capitales, del incentivo de la obra pública y de una revisión total de la política financiera que es la causante de los altos costos de producción.

No obstante, si analizamos los cuatro institutos incluidos en este proyecto, vemos que los dos primeros —el período de prueba y la jornada de tipo parcial y reducida—, aunque de manera difusa, ya estaban en la legislación vigente mientras que los restantes son de carácter temporal. En consecuencia, no me preocupa su suerte futura.

Por ello entiendo que este proyecto merece la chance de su vigencia y por esa razón adelanto mi voto afirmativo sin perjuicio de que en la consideración en particular proponga realizar algunas correcciones referidas a la seguridad del futuro empleador y del empleado.

Resulta evidente que la realidad que marca todo el destino de este proyecto de ley es insoslayable. Hay provincias que presentan un índice de desocupación superior al 14 por ciento, mientras que la subocupación alcanza el 12 o el 13 por ciento. Tal es el caso de la provincia que represento, donde el veintisiete por ciento de la población está en una situación de no poder acceder a puestos de trabajo. Ello merece la preocupación de los factores políticos, que deben tratar de buscar aunque más no sea un paliativo.

No reprocho a la norma situaciones de posibles explotaciones. Creo que ello no puede existir porque la situación de temporalidad provoca que el supuestamente explotado prescin-

da de esa relación laboral en forma inmediata. Esta norma no altera la protección del trabajador, que está insertada históricamente en la mentalidad argentina mediante una robusta legislación laboral. Quizá podría calificar a esta iniciativa como inocua. De ninguna manera irrita a mi conciencia. Por el contrario, merece un debate profundo incorporar la ética de la empresa y del empresario a la relación laboral. Tal vez esa sea una deuda política que tengamos que saldar el año que viene.

Sr. Presidente (Usandizaga). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Señor presidente: ha transcurrido un extenso peregrinaje con este tema de la flexibilización laboral, que también se denominó "promoción del empleo" y "modernización de las relaciones de trabajo".

Hoy estamos considerando en este recinto parte de lo que se viene discutiendo desde hace un año y medio. Hoy se han escuchado extensas exposiciones sobre este tema. Como balance general concluyo que existe un rechazo mayoritario a este comportamiento que está dando el gobierno a la reforma de las relaciones del trabajo.

Por esa razón a partir de ahora deberíamos iniciar un análisis mucho más profundo y no tan superficial como el que se ha realizado hasta el momento. El estudio exhaustivo debe producirse en todos los ámbitos de discusión. Lamentablemente estos temas se debaten fuera del Parlamento. Se alcanzan acuerdos dentro del ámbito de algunos cuerpos reducidos de los actores sociales. Las cuestiones se traen "cocinadas" al Parlamento, donde pasan rápidamente por las comisiones. Allí no se nos otorga el tiempo suficiente para hacer las consideraciones que estimamos pertinentes.

La posición de la Unión Cívica Radical se basó en una negativa permanente a la precariedad del empleo y a la legislación que reduce derechos. Nos hemos negado a que se denigre al trabajador. Jamás hemos estado en desacuerdo para discutir formas y modalidades que mejoren las relaciones del trabajo y que, sobre todo, apunten a su modernización, con vistas a un mejor funcionamiento, que tienda en el futuro a promover las condiciones productivas y del trabajo en la República Argentina.

Hemos estado debatiendo durante más de un año proyectos y borradores que llegaban del Poder Ejecutivo y que realmente nos asustaban porque conmovían las concepciones, los sentimientos y la formación política de todos los que estábamos en este Congreso. Digo todos porque también tocó la fibra íntima, los sentimientos

tos y los principios de los diputados del oficialismo, fundamentalmente aquellos de extracción gremial que vieron de qué manera se borraban derechos y reivindicaciones que fueron logrados luego de muchos años de lucha, incluso durante el gobierno del propio general Perón.

Así fue como se desgranó y llegó a introducirse en el Congreso un proyecto de 18 artículos que durante un tiempo permaneció en la Comisión de Legislación del Trabajo.

Mantuvimos conversaciones con el entonces ministro Enrique Rodríguez y también hablamos con la mayoría de los actores sociales, porque algunos quedaron sin consultar. Se hicieron seminarios y congresos abiertos en los que todos los actores llevaron sus posiciones y manifestaron seriamente su disconformidad con el tratamiento de este tema laboral que no apuntaba a modernizar las relaciones del trabajo sino simplemente a buscar una mayor rentabilidad para los grupos económicos que hoy dominan en el país y también el mundo.

Tenemos que llamar a este proyecto por su verdadero nombre, porque los resultados que se van a lograr no son los que se dicen. Aquí se señala que vamos a considerar un proyecto sobre reforma laboral y modalidades de empleo con el objetivo de generar más puestos de trabajo para paliar la grave situación que día a día se profundiza en la República y que se vincula con el incremento de los niveles de desocupación.

Sin embargo, nada se va a paliar. Hace tres años este Congreso votó una ley de empleo con esos mismos objetivos. Los argumentos fueron iguales a los que hoy se dieron aquí para aprobar este proyecto. El objeto era el de frenar la creciente desocupación que en ese momento comenzaba a alcanzar niveles excepcionales.

Hoy nos encontramos con que el incremento fue alarmante en algunas grandes ciudades tales como Rosario, Tucumán y Mendoza. Hay terribles bolsones de pobreza y altos índices de desocupación y subocupación.

De todas maneras consideramos que es necesario tratar las reformas al régimen que regula las relaciones del trabajo porque tenemos que adecuarlas a los tiempos que estamos viviendo. Debemos vencer anacronismos contenidos en legislaciones que sirvieron para otros tiempos. Debemos adecuar dicha legislación mirando hacia el futuro que se nos presenta como un desafío.

Ese es el desafío que tenemos que enfrentar llevando a cabo una reforma integral al siste-

ma laboral argentino para acompañar los profundos cambios que se producen en el campo económico. Las soluciones a los problemas del trabajo, la desocupación y la miseria pasan por reformas sustanciales y profundas en el terreno de lo económico. Si no se producen rectificaciones en el plano económico se seguirán profundizando la desocupación, la miseria y los bolsones de pobreza en la República Argentina.

Los integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical hubiésemos querido presentar un dictamen en minoría, pero no contamos con el tiempo suficiente como para hacerlo. Por tal motivo hoy presentamos en mesa de entrada un proyecto alternativo que queremos que sea incorporado en este tratamiento.

Solicitamos que se tome en cuenta esa iniciativa a fin de que forme parte del proyecto que cuenta con dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación del Trabajo. Dejo constancia de que dicho proyecto está registrado bajo el número 5.564-D-94 y sugiero que se considere antes de votar en general la iniciativa que estamos analizando.

Teniendo en cuenta la situación de deterioro social que se está viviendo en el país es importante que hagamos un poco de historia. Desde hace muchos años venimos arrastrando una crisis y vemos cómo se ha ido desplazando la participación de los trabajadores en el reparto de la riqueza. Es importante que analicemos esta situación para poder entrar a considerar estas normas de fondo.

Por ejemplo, tomando como base 100 para el año 1970 vemos que en 1974, que fue un período muy bueno durante el gobierno del general Perón, el trabajador tuvo un buen nivel salarial pues se había proyectado un 126,4.

Esa cifra descendió abruptamente en 1982, durante el proceso del gobierno militar, fundamentalmente con la nefasta política económica de Martínez de Hoz que marcó el comienzo del engendro de esta política aplicada hoy por el ministro Cavallo, que fue también en ese año quien culminó con la estatización de la deuda externa. En ese momento el salario descendió a un 79 por ciento; luego tuvo un repunte en el año 1985 durante el mejor momento del Plan Austral llegando al 108 por ciento, mientras que en 1991 descendió al 70 y en la actualidad se encuentra en valores inferiores. Estos datos demuestran que desde el año 1970 hasta la fecha el salario ha perdido un 25 por ciento del valor real de su poder adquisitivo.

Esta situación se produjo como consecuencia de la crisis de los sectores de la industria y la

Actividad económica se fue desplazando hacia los sectores de los servicios.

Durante el gobierno militar se vivió un cimbronazo porque se dejaron fuera del escenario a organizaciones gremiales y muchos convenios colectivos logrados en 1975 fueron prácticamente barridos. Así fue como comenzó un camino descendente de la clase trabajadora argentina.

Con las crisis sufridas en la industria, el trabajo y la economía empezamos a padecer la decantación de la situación laboral y allí comenzó la escalada de la desocupación. En los años de la década del '70 la desocupación fue del 4 por ciento; en 1982 ascendió a un 6 por ciento, luego se mantuvo estática y en 1991 llegó al 8 por ciento, siendo en estos momentos de 13 puntos y ascendiendo en algunas provincias hasta un 18 o 20 por ciento.

La subocupación ha atravesado por una circunstancia similar. El deterioro del salario y de las relaciones laborales se vio agravado por la gran cantidad de cuentapropistas que aparecen como personas ocupadas y que han abierto un quiosco, manejado un remise o vendido en estaciones terminales de ómnibus porque no tenían un trabajo fijo, aunque se consideraban autónomos.

Cuando analizamos el desplazamiento que ha tenido el reparto de la riqueza vemos que hay valores que realmente nos preocupan. Por ejemplo, en el año 1970 la participación de los trabajadores en el producto bruto interno alcanzó el 43 por ciento; en 1974 dicho porcentaje ascendió al 45 por ciento, cayendo a 37 en 1980 y a 24 en 1982 —cuando se estatizaba la deuda externa argentina—, volviendo luego a trepar al 39 por ciento. Desciende en 1991 a un 24 por ciento, mientras que en la actualidad está arañando el 20 por ciento.

También se ha registrado una declinación constante de la participación de los sectores pobres en el producto bruto interno. Es así que observamos que el 30 por ciento de los sectores pobres ha descendido de un 10 a un 7 por ciento, los sectores medios han sufrido el mismo descenso mientras que los altos, que constituyen el 10 por ciento de la población —en donde se incluye a las grandes empresas que hoy monopolizan la situación económica—, han ascendido del 25 al 43 por ciento en la participación del producto bruto interno. Esto evidencia una situación desigual en la distribución de la riqueza, y se va descarnando una realidad en verdad muy preocupante que debemos analizar con mucha seriedad.

Antes de comenzar a analizar el tema de las diversas modalidades de empleo que propone el proyecto en consideración quiero referirme a esta devaluación o degradación social que se está produciendo. Los proyectos de ley sobre modificación del régimen de accidentes de trabajo y de la ley de quiebras apuntan a ese tipo de degradación al igual que otros asuntos en análisis. Se puede llegar a sancionar estas leyes sin degradar a los trabajadores, pero para ello debemos imaginar propuestas serias y concretas en las que se tengan en cuenta la situación del trabajador y la del empresario porque todos son parte de la realidad económica y social del país, de la fuerza productiva de la República Argentina.

En el marco de este proyecto nosotros admitimos algunas de las propuestas de modalidades de empleo en el entendimiento de que se ajustan a la realidad, las exigencias y las necesidades de los tiempos porque hay situaciones de hecho que de algún modo nos van pidiendo que cambiemos la legislación y nos vayamos adecuando a estos tiempos.

Durante el debate en particular formularemos las consideraciones pertinentes, pero solicitamos a los miembros de la comisión que en esa instancia tratemos de conversar, consensuar y hacer lo que no pudimos concretar en las comisiones, modificando algunos artículos que a nuestro juicio son muy importantes.

Existen situaciones puntuales en las que no podemos permitir que se continúe afectando al trabajador en su relación contractual ni tampoco al propio sistema de seguridad social en lo relativo a los aportes previsionales.

En general estamos de acuerdo con el período de prueba pero no coincidimos con el oficialismo con respecto a su duración. Estamos de acuerdo con el tiempo parcial —con las reservas que formularemos— y con algunos contratos de fomento de empleo, pero en eso debemos tener cuidado de poner las condiciones necesarias y aclarar el articulado porque por allí es donde se puede abrir la brecha a un posible fraude laboral, porque estos instrumentos pueden ser utilizados para poner al obrero en una situación de precariedad absoluta y de esclavitud.

La filosofía que impulsa estas ideas viene de muy lejos. A nosotros nos ha sido impuesto cuando se renegoció la deuda externa y cuando tratamos de ingresar al plan Brady. Esta fue la condición que se nos impuso; es la asignatura pendiente que tiene este gobierno. Se empezó con la reforma del Estado, y se siguió con la emergencia económica y la privatización

de las empresas en la forma en que se hizo. Quedaba esto que nos han enviado para cerrar el círculo de exigencias del Fondo Monetario Internacional, para cerrar todo el ajuste que se nos viene tratando de imponer desde afuera.

Con el permiso de la Presidencia voy a citar un párrafo de una nota difundida por Noticias Argentinas, donde dice que las Naciones Unidas adjudican al ajuste ortodoxo la responsabilidad central de que en la región se haya instalado una epidemia propia de otro siglo y de situaciones de gran pobreza, como es el caso del cólera; y habla de que en Latinoamérica mueren dos mil chicos por día.

Esto fue reconocido por las Naciones Unidas y demuestra una situación de extrema gravedad. Nosotros tenemos que apuntar a mejorar la legislación para ir adecuándola, pero ello tiene que estar acompañado de políticas económicas profundas y de grandes reformas.

Aquí se ha hecho *lobby* permanentemente para que se bajen los costos laborales. Se dice siempre que las empresas tienen necesidad de bajar los costos laborales. Se trata de mantener conformes a las pymes, que están pasando una mala situación y a las cuales tenemos que salir a asistir con legislaciones serias y profundas. No les vamos a solucionar el problema con estos paliativos, porque el costo de la producción está compuesto por varios elementos. En

este sentido el costo laboral figura en tercer lugar; primero están los insumos, luego los servicios y por último el costo laboral. La incidencia de este último es realmente ínfima. Un aumento del 10 por ciento en los salarios tiene una repercusión del 1,5 por ciento de aumento en el costo de producción. Y nuestras empresas están sufriendo las tasas exageradas de los servicios: energía, combustibles, teléfonos, peaje, costo financiero, etcétera.

Como bien se dijo en este recinto, todos esos elementos forman parte de un costo que está entre los más altos del mundo, lo que no permite competir con todos los productos que entran del extranjero, los cuales aprovechan de nuestras fronteras abiertas y de la falta de un arancelamiento adecuado para proteger a la industria nacional que día a día cierra sus puertas y deja a miles de trabajadores en la calle.

La situación de fondo pasa por la convertibilidad que incluso crea esta situación de desigualdad, esta distorsión en los valores relativos de los precios, de los salarios y de los costos. Aquí es donde está el fondo de la cuestión.

—Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Carlos Alberto Romero.

Sr. Novau. — Nosotros decíamos que a la estabilidad hay que complementarla con medidas urgentes para reactivar nuestra industria y dar a nuestra economía un fuerte sesgo exportador, para enviar hacia el exterior productos con alto valor agregado, ya que este último significa trabajo.

Estamos abiertos a la discusión de proyectos que tengan dinámica y tiendan a solucionar los problemas, pero por sobre todas las cosas, que nos ayuden a transitar por este ingreso al siglo XXI con un país productivo y con trabajo.

Por ello es que propondremos la incorporación —durante la discusión en particular formularemos la propuesta concreta— de los trabajadores en todo esto, porque no queremos que ellos sean los convidados de piedra; no queremos que sólo representen un número, sino que participen en este proceso de reconversión.

Pretendemos también que en nuestro proyecto alternativo se agregue el derecho a la información y la consulta, porque es importante que el obrero sea informado y consultado sobre todos los cambios relativos a la empresa, ya sean tecnológicos o del medio ambiente, así como también de todos los conflictos y dificultades por las que aquellas atraviese, ya que con la participación de los trabajadores y los empresarios en la responsabilidad que les cabe a cada uno de ellos, con un cambio de mentalidad —que es lo que nos está haciendo falta a los argentinos—, transitaremos el camino de la transformación.

Nuestro bloque votará en contra del dictamen de mayoría y durante el debate en particular solicitaremos la incorporación de algunos artículos de nuestra iniciativa, para sancionar una legislación que sea posible y digna para todos los sectores sociales y de la producción de nuestro país.

También lo insto para que a partir de hoy iniciemos en el Parlamento un diálogo entre todos los sectores sociales y políticos de la República, para concertar los cambios que son necesarios en materia social y económica, sobre todo en los aspectos vinculados a las convenciones colectivas de trabajo, la ley de asociaciones sindicales y la legislación promocional que apunte a mejorar la calidad de vida de los trabajadores argentinos.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: cuando este proyecto se sometió a discusión en el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo,

jamás pasó por nuestra cabeza que debatiríamos la Revolución Industrial, ni el desarrollo de la agricultura y la ganadería, ni la realización de una revolución cultural que posibilitara que nuestro pueblo implore al Supremo para que elimine a los empresarios del mundo y haga cumplir mínimamente algunos de los preceptos papales contenidos en las encíclicas.

¿Qué queremos decir con esto? Que algunos diputados piensan que estamos tratando la famosa flexibilización laboral que en su momento circuló en esta Cámara y que modificaba totalmente la Ley de Contrato de Trabajo.

Como bien lo dijo el señor diputado López, cuando se comenzó a debatir la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo en el seno de la comisión citada, nos pusimos de acuerdo para discutir exclusivamente los puntos que posibilitaran el ingreso de nueva mano de obra a los planteles estables de trabajadores que existen en nuestro país. Así pasó ese primer proyecto sin ser tratado; luego llegó otro con 18 artículos que analizamos profundamente y respecto del cual escuchamos la opinión de todos los sectores.

Después aparece este proyecto de ley, que consta de seis artículos pero que trata cuatro temas específicos. En realidad se trata de sincerar una situación de hecho existente en el país. En ningún momento los integrantes del bloque Justicialista, miembros de la Comisión de Legislación del Trabajo, pusimos como objetivo exclusivo de esta norma el tema de la generación de empleo.

Esta iniciativa pretende encarrilar una realidad que resulta perversa en la Argentina. No olvidemos que la Ley de Contrato de Trabajo vigente permitió la creación de 500 empresas de trabajo eventuales, que son meras intermediarias de mano de obra, que cobran un porcentaje al trabajador y otro a las empresas, para presentar ante las mismas a las personas que ingresan al mercado laboral. ¿Por qué operan de esta manera estas empresas? Porque de esa forma prestan su fachada legal para que los trabajadores nunca queden efectivos en sus puestos de trabajo, o si alguno queda efectivo es luego de superar un largo período de prueba.

Invito a los señores diputados a observar los avisos clasificados de los domingos de uno de los diarios de mayor circulación en el país; allí advertirán que el 95 por ciento de los ofrecimientos de nuevos puestos de trabajo pasan por empresas de trabajos eventuales, estas intermediarias o mercaderes de la mano de obra

que posibilitan con su accionar el no cumplimiento de la Ley de Contrato de Trabajo.

Esto pasa en nuestro país porque quienes tenemos que legislar no nos animamos a establecer que debe existir un período de prueba de tres meses para que un trabajador acredite que sabe trabajar, y superado este lapso quede efectivo. Este es el tema que estamos discutiendo en este momento; si no lo hacemos, estaremos defendiendo la existencia de los mercaderes de mano de obra.

¿Por qué no denunciemos a todas las intenciones y a todos los organismos del Estado que tienen personal contratado, con antigüedades, que van de los 10 a los 15 años y a quienes renuevan los contratos cada seis meses? ¿O eso no es dar precariedad al trabajo en la República Argentina?

Hoy venimos a hablar de Perón, pero nadie dice que cuando en 1955 lo echaron al general, los que hoy estamos defendiendo esta norma estábamos poniendo nuestros cuerpos para que nos mataran, mientras había otros que estaban en el otro bando ayudando a derrocarlo.

Es fácil utilizar las figuras que son preclaras para el pueblo, pero no hay que hacerlo en este tipo de discusiones porque lo que estamos discutiendo corresponde a la Argentina de 1994, la Argentina que está aceptando el desafío de usar la inteligencia de sus habitantes para adecuarse a la realidad económica del mundo actual.

Yo escuché al señor diputado Novau, quien expresó que debemos sentarnos a discutir para consensuar los cambios que debemos introducir a la legislación vigente. La realidad es que estamos discutiendo todos los miércoles y aquel que diga que en el ámbito de la Comisión de Legislación del Trabajo no se discute, falta a la verdad. Veladamente se pretende culparnos de legislar contra los derechos de los trabajadores. Desafío a que un diputado hable y denuncie cuando la Comisión de Legislación del Trabajo despachó medidas en contra del derecho de los trabajadores argentinos; que hable y que diga en qué ley y en qué artículo hay una cuestión de ese tipo.

Nosotros estamos aquí tratando de ser el fiel de la balanza para no permitir los abusos a través de la modificación de las leyes con proyectos que presenta nuestro gobierno no porque se le ocurra sino presionando por los empresarios que reclaman permanentemente para llevar más ventajas a sus bolsillos, utilizando el argumento del alto costo laboral argentino. Nosotros lo sabemos; es por esta razón

que asumimos el desafío de analizar con profundidad el tema. Lo que pretendemos con esta actitud es que no se nos acuse de no avanzar en la discusión de las leyes que se proponen y que por ello la Argentina se ve obligada a parar su transformación económica. Nosotros afirmamos que esto no va a suceder porque sus dirigentes son capaces de aceptar este desafío y discutir todos los temas de la legislación laboral que se presenten. Sancionaremos todos aquellos que conlleven a la actualización de la relación obrero-empresario sin perjudicar los fundamentales derechos de los trabajadores.

Nosotros en este proyecto de ley hemos aceptado que se establezca un período de prueba. ¿Creen que el trabajador argentino no quiere ser probado? ¿Por qué no preguntan a los trabajadores que se han quedado sin trabajo si están dispuestos a trabajar durante tres meses y demostrar que valen para quedar efectivos? Lo que no tenemos que permitir es que haya abuso por parte del sector patronal, y esta situación también la prevé el proyecto. Tampoco me asusta que a través de los convenios se pueda ampliar el período de prueba hasta seis meses, porque en nuestro país ya existen convenios en los que se fija un período de prueba de un año de duración, e incluso hay sectores gremiales que lo toman como ejemplo.

Ante esta realidad no sé si este proyecto de ley está cediendo derechos de los trabajadores; hasta creo que los preserva. En la medida en que no asumamos la nueva realidad económica que vive la República Argentina y legislemos en base a ello, el trabajador corre el riesgo de no poder quedar efectivo en un empleo. Mediante las medidas que propiciamos estamos brindando esa posibilidad; establecemos las obligaciones y los derechos de esta nueva situación legal, a la vez que estamos aportando para que nuestro país se desarrolle en todo sentido porque el trabajador argentino también lo está haciendo.

Como dirigente obrero me resultaría fácil "subirme al caballo" y hacer un gran discurso acerca de una Argentina que ya pasó, que no quiero olvidar, pero que me incita a trabajar por una nueva Argentina. El mañana me llama, apostando a un futuro grandioso que todos los que estamos aquí esperamos. No nos quedamos sin aceptar el desafío de avanzar en la solución de los problemas por lo que puedan decir los que están en contra de este proyecto, porque siempre resulta más fácil destruir que construir.

Otro tema que trata este proyecto es el que se refiere al contrato de trabajo a tiempo par-

cial. Me pregunto a quién perjudicamos con la posibilidad de que en lugar de trabajar ocho horas un trabajador lo pueda hacer por dos, tres, o cuatro horas, máxime si tenemos en cuenta que ese trabajador percibirá su salario proporcionalmente al tiempo trabajado, tomando como base la remuneración del trabajador a tiempo completo. Además se lo ampara en las prestaciones de obra social y previsional aportando en proporción a la remuneración percibida.

¿Por qué vamos a estar en contra de favorecer la obtención de un puesto de trabajo por parte de los mayores de cuarenta años, las mujeres, los discapacitados y los ex combatientes de Malvinas? Para incentivar a los empresarios a dar trabajo prioritariamente a estas personas, a través de la norma que estamos tratando se los exime de aportar el 50 por ciento de las contribuciones patronales al sistema de seguridad social, con excepción de las obras sociales. En este punto queremos dejar algo en claro: el hecho de que en el artículo pertinente figure la mujer no significa que la equiparemos a los discapacitados o a los ex combatientes, como algunos diputados deslizaron con ironía. Vivimos una realidad: la mujer se encuentra desamparada frente a la posibilidad de obtener un puesto de trabajo, cuando es menor de cuarenta años, nadie la toma frente a la posibilidad de que quede embarazada o porque goza del beneficio del día femenino. Seamos realistas: ésta es la situación laboral que viven las mujeres en nuestro país. Y cuando superen los cuarenta años, no las toman porque las consideran viejas.

Con este proyecto pretendemos defender a las trabajadoras argentinas y queremos que gocen de derechos y prioridades. En la medida en que procedamos sanamente y pongamos todo nuestro sentir y pasión para defender esta propuesta y no para otorgar graciosamente ventajas al empresario, es que lograremos legislar con justicia.

Vamos a aceptar el desafío de crear algún nuevo puesto de trabajo; y aunque sea uno solo, para algo habrá servido esta ley. No debemos quedarnos inmovilizados mientras la gente no consigue trabajo y visita nuestros despachos sin que podamos dar respuestas.

Otro de los temas a que se refiere es al contrato de aprendizaje. Me pregunto qué empresa puede ofrecer trabajo a un joven que no posee experiencia laboral alguna, si antes no le hemos posibilitado que aprenda un oficio. Egresan de las escuelas técnicas y de las universidades,

pero nadie les da trabajo. Hay que fijarse en los avisos clasificados, se requieren uno o dos años de experiencia para desempeñar cualquier puesto de trabajo, pero, ¿cómo van a tener experiencia si no les brindamos la oportunidad de adquirirla? Mediante esta iniciativa les estamos posibilitando, a través de una nueva modalidad de relación laboral, el ingreso a las fuentes de trabajo para ejercitar su profesión. No es cierto que utilizándose este nuevo sistema de contratación estemos favoreciendo el reemplazo de los planteles estables. Existe una propuesta para que establezcamos los porcentajes o cantidad de trabajadores que puedan ingresar a cada empresa mediante esta modalidad a fin de no permitir el reemplazo, el plantel estable de trabajadores. Esta fue la sugerencia que realizaron algunos señores diputados y que con mucho gusto vamos a incorporar al texto del proyecto en consideración.

Los componentes de la Comisión de Legislación del Trabajo entendemos que hemos logrado el objetivo que nos habíamos propuesto, porque no dejamos que se avanzara en la flexibilización total de la relación laboral. Si así lo hubiéramos permitido, los sindicatos y los convenios dejarían de existir, porque los empresarios desearían relacionarse directamente con los trabajadores para tratar en forma individual las condiciones de trabajo y salariales.

Por este motivo establecemos en este proyecto que deberán tenerse en cuenta los salarios de convenio y respetar los mínimos que en ellos se fijan. No dejamos desamparado al trabajador: no sólo está protegido por la obra social sino también por el accionar de los sindicatos, quienes a partir de ahora deberán esforzarse para controlar estas nuevas modalidades de trabajo.

El proyecto que estamos considerando de ninguna manera significa una entrega; por el contrario, abre una nueva posibilidad para que los trabajadores tengan una luz de esperanza, ya que la Cámara de Diputados se preocupa por tomar medidas que posibiliten acceder a ocupar puestos de trabajo a quienes no lo tienen.

Como peronista no me avergüenzo ni estoy arrepentido de defender esta propuesta porque Perón nos enseñó que debíamos aceptar los desafíos que nos plantea la evolución de las propuestas universales y ser revolucionarios dentro de la ley. Nunca ayudamos a derrocar un gobierno elegido democráticamente, todo lo hicimos dentro de la ley y la democracia. Por ello ahora en democracia proponemos este pro-

yecto de ley que creemos beneficia a los trabajadores. (Aplausos.)

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Pierri.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar en general.

Sr. Galván. — Señor presidente: solicito que la votación se efectúe en forma nominal.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal está suficientemente apoyado.

—Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Pierri). — No habiendo número, se va a llamar para votar.

—Mientras se llama para votar:

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Señor presidente: cuando hice uso de la palabra formulé una solicitud a esta Cámara para incorporar el proyecto de ley contenido en el expediente 5.564-D-94 al tratamiento de este tema. En consecuencia, hago moción para que la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento, a fin de que se incorpore a la consideración la iniciativa que acabo de mencionar. La norma hubiese formado parte de un dictamen de minoría que no alcanzamos a presentar dentro del término reglamentario en la Comisión de Legislación del Trabajo. Además, los artículos de dicho proyecto serán propuestos durante la consideración en particular por nuestro bloque. Es una iniciativa muy similar a la contenida en el dictamen de mayoría, aunque presenta disidencias parciales con respecto a algunos de los institutos propuestos.

Sr. Presidente (Pierri). — El proyecto al que se refiere el señor diputado se considerará como antecedente, ya que sólo se lo podría tener en cuenta si la votación nominal en general resultara negativa.

Se va a votar en general y en forma nominal el proyecto de ley en consideración.

—Se practica la votación nominal.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Sobre 145 señores diputados presentes, han votado 91 por la afirmativa y 50 por la negativa, registrándose además 3 abstenciones.

—Votan por la afirmativa los señores diputados: Abasto, Abilaggie, Aceñola, Alba-

monte, Alcalá, Alvarez (C. R.), Alvarez Echagüe, Aranda, Arias, Ayala, Barberá, Baum, Benzi, Bernádez, Bianchi Silvestre, Borda, Bracchi, Branda, Brunelli, Bultrich, Cámara, Camaño, Casari de Alarcía, Castillo (J. L.), Castro, Cerdica, Corchuelo Blasco, Crostelli, Dand, Digón, Doumi, Drisaldi, Durañona y Vedia, Fines, Gazia, Giménez (R. F.), Gloja, Golpe (C. H.), Granados, Hardy, Herrera Arias, Humada, Ituro, Juncosa, Kessler, Lafalla, Lahoz, Lamberto, Larraburu, Leconte, Llopis, López (J. A.), López Arias, Macedo, Maidana, Manfredotti, Maqueda, Martínez (E.), Martínez (S. V.), Martínez Garbino, Matzkin, Mendoza (C. R.), Michelli, Michitte, Miglione, Müller, Muniagurria, Parada, Pepe, Pérez, Perrini, Pesce, Pichetto, Rodríguez (M. E.), Rojo, Romero (C. A.), Romero (H. A.), Rubini, Ruiz Palacios, Salino, Seelzi, Sebastiani, Soria, Sucaria, Sueiro, Togni de Vely, Toma, Toto, Valcarcel, Varela Cid y Venesia.

—Votan por la negativa los señores diputados: Algaba, Alvarez (C. A.), Armendariz, Ayetz, Becerra (C. A.), Bonomi, Bruzzo, Cabirón, Callaba, Closs, D'Ambrosio, D'Elia, Estévez Boero, Fabrisin, Fernández Gill, Fernández Meljido, Flores, Fragoso, Galván, Gauna, Jaunarena, Kelly, Koth, López (A. H.), Machado, Marcos, Mathov, Mercader, Montiel, Moreau, Muñoz, Nieva, Novau, Olivera, Orquín, Polke, Pellin, Pernasetti, Piccinini, Polino, Prat, Roig, Sampietro, Santin, Spinoso, Terragno, Trettel Meyer, Vicchi, Viglione y Zuccardi de Flamarique.

—Se abstienen de votar los señores diputados: Balestra, Díaz Martínez y Usandizaga.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda aprobado en general el proyecto de ley.

En consideración en particular el artículo 1º.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Señor presidente: coincidimos con el concepto de período de prueba que aparece en este artículo, pero debemos hacer algunas observaciones que solicitamos sean tenidas en cuenta por la Honorable Cámara.

Proponemos que la parte inicial, que define el tiempo de duración del período de prueba, establezca lo siguiente: "El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros tres (3) meses. En tal caso se aplicarán las siguientes reglas...". De esta forma se elimina la prolongación del período de prueba hasta seis meses según se acuerda en los convenios colectivos de trabajo.

Por otra parte, en relación con el punto 5, solicitamos que se redacte de la siguiente manera: "El trabajador y el empleador estarán

obligados al pago de todas las contribuciones y aportes para el sistema de la seguridad social".

En el proyecto aprobado en general se habla de una excepción, lo que contribuiría a agravar aún más la difícil situación vinculada con los fondos del sistema previsional. Estas consecuencias podremos observarlas también en otros institutos que se tratarán más adelante.

Esta excepción en el período de prueba es muy peligrosa porque se suma a la reducción de los aportes patronales establecidos en virtud del Pacto Fiscal Federal, que produce una sangría al sistema previsional de 2.000 millones de pesos, lo cual representa el 0,77 por ciento del producto bruto interno del país. Sin duda esto nos lleva por un camino que conduce a corto plazo al colapso del sistema de seguridad social.

En el punto 6, en el que se establece: "El trabajador tendrá derecho durante el período de prueba a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo, incluidos los derechos establecidos para el caso de accidente o enfermedad inculparable, con excepción de lo prescrito en el cuarto párrafo del artículo 212 de esta ley", proponemos que se agregue el siguiente párrafo: "En tales supuestos, si el empleador despido al trabajador durante el plazo de las interrupciones pagas por accidente o enfermedad, deberá abonar los salarios correspondientes a todo el tiempo que faltare para el vencimiento de aquél o la fecha de alta según demostración que hiciera el trabajador." De esta manera se seguirían respetando los derechos que le asisten al trabajador enfermo, ya que en ninguna legislación que se conozca han sido derogados.

Para el punto 7 proponemos la siguiente redacción: "El período de prueba se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social." Hay cierta coincidencia con el texto aprobado en general, pero la diferencia reside en el hecho de que en dicho proyecto aparentemente el período de prueba es considerado como una modalidad contractual diferente, cuando en realidad el contrato a prueba es parte del contrato por tiempo indeterminado.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿La comisión acepta las modificaciones propuestas?

Sr. Borda. — Señor presidente: las inquietudes planteadas por el señor diputado Novau, que ha presentado un proyecto alternativo en el que está condensado el pensamiento de la representación radical, están contempladas en cada uno de los apartados de la iniciativa que

estamos considerando. Por lo tanto, la comisión no acepta la propuesta del señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 1º.

—*Resulta afirmativa.*

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 2º.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Señor presidente: compartimos plenamente la modalidad del "tiempo parcial" que establece este artículo, pues se trata de un instituto reconocido internacionalmente que figura dentro de las recomendaciones de la OIT. No podemos dar la espalda a esta realidad y debemos aceptar esta figura porque es importante.

Escuchando el encendido discurso del señor diputado Castillo daba la impresión de que estábamos descalificando este instituto. Reitero que se trata de un aspecto muy importante porque solucionará muchas dificultades y permitirá satisfacer necesidades, tanto del sector empresario como del obrero. Pero debemos tener cuidado en no incurrir en algún tipo de precarización. Para ello consideramos que debe perfeccionarse la redacción de dicho artículo. En este sentido, propongo concretamente que el punto 4 quede redactado de la siguiente manera: "Los trabajadores gozarán de las prestaciones de la seguridad social en proporción a los aportes y contribuciones efectuados. Las prestaciones de obra social serán las mismas que para el resto de los trabajadores de la actividad aportando el Estado los fondos que resulten necesarios a ese fin de acuerdo al nivel de las prestaciones y conforme lo determine la reglamentación." Esto significa que las condiciones deben ser las mismas para los trabajadores, en todas las modalidades contractuales.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: como la votación en particular no se está haciendo en forma nominal, los diputados del interbloque Alternativa Federal, queremos dejar constancia de que hemos votado en forma negativa el artículo 1º y seguiremos haciéndolo del mismo modo con el resto del articulado.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda constancia, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente: lo planteado por el señor diputado por Buenos Aires, está contemplado en el segundo párrafo del punto 4 del mencionado artículo. Por lo tanto, la comisión no acepta la modificación propuesta.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 2º.

—*Resulta afirmativa.*

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 3º.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Lafalla. — Señor presidente: este artículo establece la modalidad de fomento de empleo para los trabajadores mayores de 40 años, discapacitados, mujeres y ex combatientes de Malvinas, y reconoce un antecedente en el proyecto que fue sometido a consideración de la Honorable Cámara y luego retirado, que establecía sin embargo una limitación en el tiempo. Esto era atendible porque el riesgo tal vez no querido pero cierto es que esta modalidad —que no tiene ningún tipo de limitación en el texto propuesto en cuanto al tiempo y al tipo de empleo— se convierta en un sistema permanente y extendido, que ciertamente llevaría a una precarización no deseada de las relaciones laborales.

Por lo tanto, sugiero que en el primer párrafo, después de "...ex combatientes de Malvinas...", se agregue la siguiente expresión: "para la creación de nuevos empleos, bajo las siguientes condiciones y efectos". Esto pondría un límite objetivo y cierto a la norma y concretaría el espíritu del texto, que es efectivamente la creación de nuevos empleos.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Señor presidente: nosotros estamos de acuerdo con el instituto en esta modalidad especial de fomento del empleo. Sin embargo entendemos que debemos detenernos a analizar este asunto con ciertas precauciones porque es aquí donde se puede abrir la brecha de la tan mencionada precarización del empleo.

Para avanzar en las consideraciones propongo que en el primer párrafo se elimine la referencia a las mujeres y sólo se hable de los trabajadores mayores de 40 años. Se trata de ayudar a la mujer e incorporarla al mercado laboral, pero creo que en realidad se está haciendo una mayor discriminación precarizándola en sus condiciones de trabajo. De este modo se la conduce a una situación denigrante más perjudicial.

que la actual, porque sabemos bien que la mujer tiene fácil acceso a los trabajos de los sectores de la alimentación y textil, rubros en los cuales prácticamente se la está explotando: trabaja en condiciones mucho más desfavorables que el hombre. Por eso creo que en el tema de la mujer hay que legislar y protegerla de otro modo, buscando su incorporación al mercado laboral por otra vía.

En definitiva proponemos que el primer párrafo quede redactado del siguiente modo: "Como medida de fomento del empleo se autoriza la contratación de trabajadores mayores de 40 años, de discapacitados y de ex combatientes de Malvinas, bajo las siguientes condiciones y efectos".

Para el punto 3 sugerimos el siguiente texto: "Estos contratos se extinguen por el mero cumplimiento del plazo pactado sin obligación indemnizatoria a cargo del empleador. En estos casos el Fondo Nacional de Empleo abonará al trabajador una compensación equivalente al 25 por ciento de la remuneración promedio mensual del convenio colectivo que resulte aplicable por cada seis meses de vigencia del contrato". Aquí la promoción consiste en que el empleador no paga la indemnización, y éste es el elemento realmente promocional de esta modalidad de empleo. Debemos recurrir al fondo de desempleo —algún recurso tiene— porque hemos observado que en estos últimos años se ha implementado la modalidad del Programa Intensivo de Trabajo —PIT—, que finalmente terminó siendo desvirtuado porque se utilizó con fines políticos, siendo concebido sin criterios correctos por algún referente político y no por los organismos de aplicación pertinentes que deberían haber supervisado y guiado la implementación de estos elementos.

Existen recursos y deben ser volcados hacia este tipo de promoción. La aplicación de estos fondos se concreta por medio de una ley, y de esta forma no desprotegemos al trabajador, porque por lo menos le damos un mínimo de dinero para que por unos días pueda buscar otro empleo o paliar la difícil situación que significa quedarse sin trabajo.

Asimismo, en el punto 4 propongo que se agregue lo siguiente: "La ruptura anticipada del contrato de trabajo exige el otorgamiento de preaviso en la forma prevista en el artículo 231 del Régimen de Contrato de Trabajo." Esto coincide con lo que ya dije en el tema del período a prueba.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: quisiera que la comisión me aclare la terminología "ex combatientes de Malvinas" porque por ella se puede entender desde el general Menéndez hasta cualquier soldado raso que haya participado en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.

Por lo tanto, para evitar que el tema de los ex combatientes sea usado en forma demagógica como tantas veces se hizo, es necesario que se precise qué es lo que se quiere decir, toda vez que el punto 5 de este artículo dice que "la condición de discapacitado o ex combatiente de Malvinas deberá acreditarse mediante certificado expedido por la respectiva autoridad competente".

Sr. Rojo. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Rojo. — Señor presidente: aquí se dice que como medida de fomento se autoriza la contratación de trabajadores. ¿Esto significa que ahora está prohibido? Me parece que en lugar de "se autoriza" debería decir "se promueve".

Sr. Presidente (Pierri). — Para evitar discutir sobre cuestiones que pudieron haber sido modificadas por la comisión, por Secretaría se dará lectura del texto del artículo 3º tal cual ha quedado finalmente redactado.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Apartado que se debe agregar al artículo 3º: "El número de trabajadores contratados bajo esta modalidad no podrá superar el diez por ciento (10 %) del total ocupado en el establecimiento. En las empresas cuyo plantel esté constituido por seis (6) a veinticinco (25) trabajadores, el porcentaje máximo admitido será del cincuenta por ciento (50 %); cuando no supere los cinco (5) trabajadores, el porcentaje admitido podrá ser del cien por ciento (100 %); dicha base no deberá exceder el número de tres (3) trabajadores. El empleador que no tuviera personal en relación de dependencia podrá contratar a un (1) trabajador utilizando esta modalidad.

"Los porcentajes mencionados en el presente podrán ser aumentados por acuerdo en el marco de la respectiva Convención Colectiva de Trabajo."

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Lahoz. — Señor presidente: quería hacer una referencia a la propuesta de modificación formulada por el señor diputado Lafalla en el sentido de que el sistema aluda específicamente a la creación de nuevos empleos.

Acompaño el criterio expuesto por el legislador preopinante pero disiento en cuanto a la referencia que hizo a los ex combatientes, ya que en este caso se trata de un reconocimiento que implica una jerarquización que hace el Estado nacional y que no torna equitativa la situación si la comparamos con los discapacitados, como sucede en este caso.

Por eso propongo que esto se refiera específicamente a los discapacitados y a los mayores de 40 años, pero no a los ex combatientes, que deberían estar incluidos en cualquier tipo de empleo y no sólo en esta situación.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Salta.

Sra. Maidana. — Señor presidente: al tiempo de sustentar la posición de nuestro bloque he hecho reserva de emitir juicio respecto de algunos de los textos que en mi saber reclaman una modificación. En particular me interesa lo reglado en materia de trabajo femenino.

Pareciera que de acuerdo con esta redacción a la mujer se le está dando el carácter de un discapacitado. Esto me hace acordar de la época en que se discutió la ley del cupo, en que también se decía que las mujeres reclamábamos un porcentaje porque nos considerábamos discapacitadas.

Creo que no es ésa la situación que se planteó en aquella oportunidad ni la que se da en esta ocasión. Por eso propongo que se elimine la alusión a las mujeres en este artículo, de modo que quede redactado de la siguiente manera: "Como medida de fomento del empleo se autoriza la contratación de trabajadores de 40 años, de discapacitados y de ex combatientes de Malvinas...".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por San Luis.

Sra. Salino. — Señor presidente: insisto en la inclusión de las mujeres dentro del artículo 3º. Aplicar medidas de acción positiva que tiendan a revertir la situación de desventaja en que se encuentra la mujer en general y, en particular las mayores de 40 años, cuando intentan ingresar al mercado laboral, es muy importante. Por eso propongo apoyar esta medida de promoción que favorezca a aquellos empleadores que incluyan a mujeres en su planta de personal. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. López (A. H.). — Señor presidente: en el agregado que se ha leído por Secretaría vin-

culado con el artículo 3º, entiendo que se ha incurrido en una contradicción al aludir a la empresa con hasta cinco trabajadores.

Se ha empleado en primer término la expresión "deberá", pero después se la ha cambiado por "podrá", determinándose que la base no puede exceder los tres trabajadores. Ahora bien, el ciento por ciento de cinco trabajadores son cinco, no tres.

Lo que me parece que se ha querido expresar es que la empresa con menos de cinco trabajadores podrá tener hasta tres en esta modalidad de fomento de empleo. Por eso propongo que se diga que las empresas con menos de cinco trabajadores podrán tomar hasta tres con esta modalidad contractual.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Borda. — En primer lugar lo que acaba de ser leído por Secretaría es un agregado propuesto por la comisión como punto 6 del artículo 3º.

En cuanto a la aclaración hecha por el señor vicepresidente de la comisión, diputado Alcides López, creemos que es perfectamente entendible la redacción propuesta por la comisión. Cuando las empresas tengan planteles constituidos por 6 a 25 trabajadores, el porcentaje máximo admitido será del 50 por ciento. Cuando no supere los 5 trabajadores, el porcentaje admitido podrá ser —quiere decir que no es imperativo— del ciento por ciento, no pudiendo dicha base exceder el número de tres trabajadores.

En consecuencia, la comisión no acepta la propuesta del señor diputado López y mantiene el texto que ha sido leído por Secretaría.

En lo que se refiere a la modificación planteada por el señor diputado Lafalla, la comisión la acepta, quedando redactado el primer párrafo de la siguiente forma: "Modalidad especial de fomento del empleo. Como medida de fomento del empleo se autoriza la contratación de trabajadores mayores de 40 años, de personas con discapacidad, de mujeres y de ex combatientes de Malvinas para la creación de nuevos empleos bajo las siguientes condiciones y efectos":

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: desearía que la comisión aclare qué se entiende por ex combatientes de Malvinas. Me parece importante a los efectos de la futura interpretación de la ley.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿La comisión desea formular alguna aclaración al respecto?

Sr. Borda. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 3º con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 4º.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Señor presidente: en este artículo 4º, referido al aprendizaje, nosotros vamos a votar en forma negativa. No aceptamos este instituto porque consideramos que tal como está redactado es de una precariedad total y permitirá que se utilicen los jóvenes de 18 a 25 años para hacerlos trabajar en condiciones de esclavitud.

Además el tema del aprendizaje pasa ya por la Ley de Contrato de Trabajo, que tiene algunas disposiciones que se deben implementar. Tampoco se ha tenido en cuenta lo más importante, que es la cuestión de la formación profesional. Pero eso requiere el armado de otro marco jurídico que realmente garantice al trabajador su formación para evitar que las polivalencias funcionales — que se van practicando de hecho, aunque no están aceptadas por nuestra legislación — se transformen en una permanente catástrofe por los accidentes que sufren los trabajadores al no estar capacitados o preparados para diferentes funciones.

Por las razones expuestas consideramos que este artículo, que regula el instituto del aprendizaje, no debe ser aprobado.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia recuerda a los señores diputados que mañana a partir de las 13 se los entregarán en el Salón Azul las medallas correspondientes. Tras la entrega de las medallas, a partir de las 15, vamos a continuar con esta sesión.

Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Ibarreche. — Señor presidente: el artículo 4º del proyecto de ley tipifica el contrato de una manera muy especial. Según se establece en los fundamentos de la iniciativa, se trata de una figura contractual no laboral. Pero el contrato va a ser escrito. Así lo establece el punto 4 de este artículo, que determina además un plazo de ejecución, se refiere a la jornada de prestación del servicio, al monto compensato-

rio, al convenio colectivo de trabajo, a la cobertura de riesgo. Esto no resiste un encuadre dentro de la materia laboral; no entenderlo así sería como utilizar meros eufemismos.

Por ello, a los fines de una mayor precisión de la figura jurídica, a efectos de que ésta pueda servir y no se desnaturalice por la ambigüedad o por quedar librada a una reglamentación que quizá nunca ocurra, sugiero que se contemple el vencimiento del plazo o la rescisión anticipada del contrato. En este caso habría que establecer que en el supuesto del cumplimiento del plazo del contrato o de rescisión unilateral no habrá lugar a indemnización alguna.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Brunelli. — Señor presidente: a fin de que los trabajadores contemplados en este artículo queden en un pie de igualdad con aquellos a los que se hace referencia en los tres artículos anteriores, propongo que a continuación del punto 4 se agregue la siguiente frase: "Esta instrumentará los mecanismos para garantizar al aprendiz una adecuada cobertura de salud".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — La comisión acepta el agregado propuesto por el señor diputado Brunelli.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 4º con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 5º.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Señor presidente: espero que el bloque de la mayoría guarde silencio mientras formulo estas consideraciones, porque aquí no estamos haciendo una compulsa. Lo que venimos a plantear es la posición del bloque de la Unión Cívica Radical en torno de una propuesta que se ha hecho en relación con este proyecto, en el que hemos tratado de colaborar y conciliar una posición. No venimos a confrontar ni a hacer tironeos para ver quién saca mejor partido de todo esto.

Si nos aviniéramos a analizar concienzudamente lo que se ha estado proponiendo, podríamos mejorar enormemente este proyecto de ley. Lamentablemente en muchos casos no se me ha escuchado al formular propuestas al señor miembro informante.

Con respecto al artículo en consideración aclaro que el bloque de la Unión Cívica Radical lo considera ocioso por cuanto el seguimiento de la situación laboral está contemplado en la ley de empleo.

Por otra parte, se habla de un acuerdo marco que permitió consensuar los distintos proyectos de ley que fueron enviados al Parlamento. Pero no debemos olvidar que dicho acuerdo se logró en el ámbito del gobierno con sectores empresariales minoritarios que tienen la fuerza y el poder económico de la República y un sector paralizado del movimiento obrero argentino. De él no participaron la mayoría de los trabajadores ni tampoco estuvieron presentes las cámaras empresariales que representan a la pequeña y mediana empresa ni los empresarios del interior del país, que son los que están sufriendo la grave crisis que ocasiona este terrible ajuste económico que los ha llevado prácticamente a la quiebra.

Por las razones expuestas el bloque de la Unión Cívica Radical considera que el artículo en consideración es inviable y sugerimos que se impulse un marco económico, político y social más amplio y representativo a fin de consensuar estos importantes proyectos de ley que regirán el funcionamiento de la actividad productiva del país.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente: me sorprende que el señor diputado Novau diga que no lo escuchamos porque no es así, ya que siempre discutimos los distintos proyectos que se encuentran a estudio de la comisión, lo que no significa que se acepten los planteos que él formula.

Tampoco comparto lo que el señor diputado expresa en relación con el acuerdo marco, ya que éste significó el punto de partida del proyecto que estamos analizando y del que participó la Confederación General del Trabajo. No sé a quién se refiere cuando habla de sectores sindicales que no estuvieron presentes. De todos modos aclaro que para que esos otros sectores a los que el señor diputado alude voladamente puedan acceder a estas discusiones tendrán que ganar las elecciones en la CGT y cuando sean sus conductores podrán participar como integrantes de esa organización. Ahora la CGT está representada por los compañeros que integran su Comisión Directiva y presidida por el compañero Cassia.

La comisión no acepta la modificación propuesta por el señor diputado por Buenos Aires y,

en consecuencia, solicita que se ponga a votación el artículo en consideración.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Señor presidente: es cierto lo que manifiesta el señor diputado Borda en el sentido de que tenemos oportunidad de dialogar, pero la realidad es otra. El bloque radical ha recorrido varias provincias argentinas y conversado con los actores sociales, con la CGT, con representantes de los trabajadores del lugar y con las cámaras empresariales. Podemos asegurar que ellos están desarrollando su actividad alejados de lo que se resuelve en Buenos Aires. Asimismo están sumamente preocupados por las políticas que se aplican desde aquí.

Por otra parte, cuando hablo de que se le otorgue mayor amplitud a este tipo de acuerdo me estoy refiriendo a que las decisiones que se tomen de carácter político y social deben tener un sentido más federal.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 5º.

— Resulta afirmativa.

— El artículo 6º es de forma.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda sancionado el proyecto de ley.¹

Se comunicará al Honorable Senado.

Se va a votar un pedido de inserción que el señor diputado Usandizaga ha hecho llegar a la Presidencia.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda autorizada la inserción solicitada.²

Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: quiero brindar una información positiva a la Cámara. Habíamos hecho gestiones ante la Secretaría Administrativa del cuerpo para que se contactara con las empresas aéreas de cabotaje Austral y Aerolíneas Argentinas, a fin de que pudiesen atender la necesidad que los señores diputados seguramente tendremos esta semana y eventualmente la próxima, de trasladarnos desde la Capital Federal hacia cada una de las regiones del país y viceversa.

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 5062.)

² Véase el texto de la inserción en el Apéndice. (Página 5075.)

Las gestiones que se han realizado obtuvieron resultados positivos ya que las empresas han asegurado que los legisladores podrán viajar y tendrán un lugar debidamente reservado. Esto me parece importante porque facilitaría el traslado de los diputados ante la posibilidad de una convocatoria urgente a una sesión a celebrarse antes de que finalice el año.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia ya ha dado instrucciones en ese sentido a la Secretaría Administrativa. El resultado ha sido favorable, por lo que no tendremos mayores inconvenientes.

8

de los candidatos de los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos.

Los partidos presentarán, juntamente con el pedido de oficialización de listas, datos de filiación completos de sus candidatos y el último domicilio electoral. Podrán figurar en las listas con el nombre con el cual son conocidos, siempre que la variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a confusión a criterio del juez.

Artículo 61: Resolución judicial. Dentro de los cinco (5) días subsiguientes el juez dictará resolución, con expresión concreta y precisa de los hechos que la fundamentan, respecto de la calidad de los candidatos. La misma será apelable dentro de los

de candidatos se realizará ante el juez federal con competencia electoral de la Capital Federal.

Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo de un treinta por ciento (30 %).

disponible, a esos fines, con suficiente antelación.

Artículo 12: Procedimiento del escrutinio. Vencido el plazo del artículo 110, la Junta Electoral Na-